



BRÚJULA CIUDADANA

MENSUAL | OCTUBRE 2013 | 50

Dialoguemos

Pacto **CON** México
Conflicto social y crisis de representación política
Tareas de la sociedad civil





Un verdadero Pacto CON México

ELIO VILLASEÑOR GÓMEZ

DIRECTOR DE INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO AC

En los últimos meses hemos visto el incremento de la violencia y la conflictividad de los movimientos sociales en México, la polarización social está presente y las respuestas de los políticos son insuficientes. A continuación se presenta un recuento de los últimos hechos.

TABLA 1. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES

<p>Reforma Educativa</p>	<p>18 de agosto 2013 en adelante. Más de 20,000 maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, principalmente, se instalaron en el Zócalo capitalino para manifestarse en contra de la Reforma Educativa. Desde ese día las marchas en el DF no cesan. Exigen reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto para plantearle sus demandas laborales y demandar la derogación de la reforma educativa.</p>
<p>Reforma energética</p>	<p>31 de agosto 2013. Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la Marcha en Defensa del Petróleo para manifestarse en contra de la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Llamó a no dar ni un paso atrás en la defensa del petróleo y la electricidad. Al pie del Monumento a la Revolución, al presentar la Reforma Energética del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas convocó a una consulta ciudadana para revertir las reformas del 27 y 28 constitucionales, consulta que tendría que realizarse con la próxima elección federal que renueve la Cámara de Diputados en 2015</p> <p>1 de septiembre 2013. Miembros y simpatizantes del colectivo #YoSoy132 realizaron una marcha ciudadana en Guadalajara, Jalisco, en contra de la Reforma Energética. Después de formar una cadena humana, se colectaron firmas que avalaran la petición para someter esa reforma a consulta popular</p> <p>22 de septiembre 2013. Andrés Manuel López Obrador encabezó la Marcha contra la Reforma Energética sobre Paseo de la Reforma. Llamó a hacer una consulta pública antes del dictamen de la iniciativa de reforma. Al día 7 de octubre se han recopilado 421,233 firmas.</p>
<p>GDF y la interlocución política</p>	<p>17 de septiembre 2013. En su 1er Informe de actividades, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del DF, puntualizó que su Administración mantiene una interlocución política con diversos grupos sociales y organizaciones ciudadanas, lo que se materializa en la cobertura oportuna de 2 mil 372 manifestaciones (concentraciones, marchas, mítines, plantones, etc.), registradas entre el 5 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013. De éstas, 1 mil 91 correspondieron a demandas locales, 1 mil 48 a demandas de carácter federal y 233 relacionadas con el ámbito privado.</p>



Pacto CON México

<p>Marcha contra el Primer Informe de Gobierno</p>	<p>1 de septiembre 2013. En protesta por el primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, diversos contingentes marcharon del Monumento a la Revolución al Palacio Legislativo de San Lázaro. Las exigencias fueron varias, pero principalmente el rechazo a la privatización de Pemex y la CFE, y contra la reforma hacendaria.</p>
<p>Liquidación de Luz y Fuerza</p>	<p>17 al 25 de abril 2013. La Caravana Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” recorrió 14 ciudades en 6 Estados de la República durante 7 días. Las demandas: reinstalación de los trabajadores despedidos y alto a la criminalización de los usuarios de la energía eléctrica.</p>
<p>1D #YOSOY132</p>	<p>1° de diciembre 2012. El movimiento surgido tras las protestas contra Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo de 2012, convocó a protestar en contra de la toma de posesión de Peña Nieto. 69 manifestantes fueron consignados por los actos de vandalismo, aunque posteriormente fueron liberados.</p>
<p>Madres de Desaparecidos y Asesinados</p>	<p>1 al 8 de noviembre 2012. Cuatro miembros de esa organización realizaron una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación, en donde exigieron justicia en los casos de sus familiares asesinados, desaparecidos, torturados, así como sus propias situaciones de amenazas y desplazamientos forzados por la violencia. En enero de 2012 realizaron una Caravana que recorrió 369 km entre Ciudad Juárez y Chihuahua.</p>
<p>Reforma laboral</p>	<p>21 de septiembre 2012. Marcha que partió del Monumento a la Revolución al Senado y a la Cámara de Diputados para abrogar la nueva legislación laboral. El contingente estuvo integrado principalmente por miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF, del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del movimiento #YoSoy132.</p>
<p>Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad</p>	<p>Marzo de 2011 a la fecha. Movimiento nacional que se formó luego del asesinato de Juan Francisco Sicilia -hijo de Javier Sicilia, líder del movimiento-. Las Caravanas por la Paz recorrieron la República mexicana, de frontera sur a la frontera norte, y parte de los Estados Unidos, unificando las voces y la exigencia de justicia de las víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos. Entre sus logros está la promulgación de la Ley de Víctimas.</p>

Fuente: elaboración propia

Estas manifestaciones ponen de manifiesto un hecho más profundo: el proceso de la transición de nuestra democracia no ha tocado los usos y costumbres perversos del ejercicio del poder, que perduró durante los gobiernos del PAN y sigue presente con la restauración del régimen priísta. En este acto patrimonialista, los gobernantes actúan de

manera discrecional y toman las decisiones de los asuntos públicos sin tomar en cuenta a los actores involucrados.

Esta forma de ejercer el poder es cada día más asfixiante para los ciudadanos, ya que se nos toma como simple operadores de las decisiones de las



cúpulas. Cada vez es más evidente el divorcio entre los gobernantes y los ciudadanos, es palpable como la ley no se aplica igual para todos, se siguen conservando privilegios y es permitido vivir en la impunidad y la corrupción.

Además, estas formas de ejercer el poder han desarrollado una cultura clientelar que mantiene controlados a los actores sociales mediante el ofrecimiento de migajas o privilegios.

Esta forma de ejercer el poder está en crisis. Las formas autoritarias en la toma de decisiones no corresponden con una sociedad informada, participativa, exigente y parte en el rumbo de las políticas públicas.

Nuestro sistema político y sus instituciones han caducado, su lógica sigue pretendiendo que los gobernantes sean los amos y los ciudadanos sean súbditos. Sin embargo, la transición del poder ejecutivo no se concretó en un cambio de régimen, tampoco se fortalecieron las instituciones que permitirían la participación social activa y horizontal.

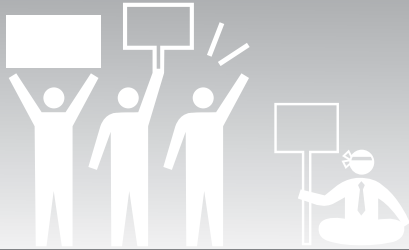
La realidad de los distintos conflictos sociales, independientemente de sus causas, expone a la luz la caducidad de dicha forma de ejercer del poder. El cambio necesario exige nuevas formas de relación entre los gobernantes y los ciudadanos y también nuevas instituciones donde se abran espacios de diálogo ciudadano para intervenir en los asuntos públicos.

La realidad actual exige nuevas reglas y métodos para resolver los conflictos a través de la consulta pública u otras herramientas. También exige un proceso de reconstrucción del tejido social, hoy polarizado, y fortalecer la cohesión social. También es importante construir una cultura del ejercicio del poder con transparencia y rendición de cuentas donde todos estemos comprometidos y obligados con la cultura de la legalidad.

Generemos puentes entre gobierno y sociedad para realmente construir políticas públicas, más que políticas de gobierno, donde interactúen gobierno y sociedad. Generemos una nueva cultura entre gobierno y sociedad donde prevalezca el diálogo público, donde las partes en conflicto presenten sus propuestas y se busquen los acuerdos para la solución de los asuntos públicos.

Las propuestas de reforma política y hacendaría tienen una gran si incorporan a los ciudadanos y ciudadanas como vigilantes y como actores proactivos en el espacio público.

Ante la descomposición del tejido social y ante un ambiente de polarización, es necesario tomar medidas urgentes para enfrentar los desafíos y construir la nueva arquitectura institucional democrática de nuestro país. No basta un Pacto **POR** México, lo que falta es construir Pacto **CON** México, **CON** el diálogo y la inclusión. ➤



La crisis de representación

LEONARDO CURZIO

ENFOQUE NOTICIAS / @LEONARDOCURZIO

No es un secreto para nadie que uno de los problemas estructurales más arraigados en América Latina es la distancia entre gobernantes y gobernados. La pavorosa desigualdad económica que existe en nuestros países no se reduce al sistema económico y social, toca también al sistema político. Buena parte de nuestras instituciones, lejos de ser incluyentes y tutoras del interés público, tienden a reproducir el nudo de intereses que permiten que los privilegios y desigualdades se perpetúen. En México el problema es particularmente grave porque, además de una grave crisis de representación en las instituciones del estado, tenemos una cultura de tolerancia y aceptación con la corrupción particularmente arraigada en el tejido social. Esto provoca una grave crisis de confianza en partidos, instituciones y agentes sociales, lo cual imposibilita (o mejor dicho complica) agregar demandas y fomentar el asociacionismo.

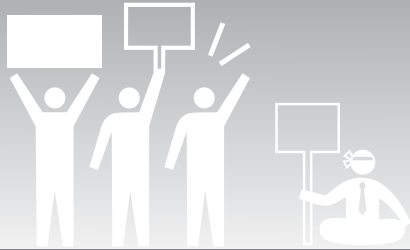
La crisis de confianza en México es tan grave que salvo la iglesia y el ejército, el resto de las instituciones tiene, en prácticamente todas las encuestas, niveles muy bajos de aceptación. En otros países (como España por ejemplo) la crisis de confianza en el sistema político o incluso en instituciones tan importantes para la articulación del Estado nacional (como la monarquía) no impide que los ciudadanos confíen en sus policías, en sus gobiernos locales y en las organizaciones no gubernamentales. La razón

es sencilla y complicada: se trata de instituciones profesionales y en el caso de las policías y gobiernos locales cercanos a la gente (los alcaldes en España¹ son personajes determinantes, mientras que en México son, en el mejor caso, estrellas fugaces) y en el caso de las organizaciones sociales han conseguido una enorme autonomía para impulsar sus agendas y sus causas.

En el caso mexicano el déficit de confianza en las instituciones va desde la impartición de justicia hasta el sistema electoral que, como es sabido, es la base de legitimación del poder. Hay aproximadamente un tercio de los compatriotas que sigue creyendo en la existencia de algún tipo de fraude electoral capaz de predeterminar de manera obscura e indocumentable (puesto que no prosperan los recursos ante el tribunal) quien ostenta el poder en este país. Sin entrar en debates político electorales, el candidato que ha ocupado el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 2006 y 2012 ha puesto en entredicho la legitimidad de los dos últimos presidentes de la república. Esta percepción de ilegitimidad es particularmente grave en la capital del país.

En efecto, los capitalinos consideran en una proporción importante que el sistema electoral mexicano es fraudulento porque permite, entre otras cosas, la compra del voto y la manipulación electoral a través de vulgares maniobras televisivas. Pero también, fueron los capitalinos quienes en las elecciones del 2009 (en las que se llamó a anular el voto), los que aportaron el porcentaje más abultado de votos nulos en todo el país. Cabe recordar que ante este dato demoledor ni el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), ni la

¹ http://politica.elpais.com/politica/2013/08/24/actualidad/1377367465_986163.html



Conflicto social y crisis de representación política

Asamblea Legislativa tomaron nota del importante porcentaje y en consecuencia no se instrumentó ningún mecanismo para corregir esta crisis de representación que por activa, pasiva y media, han expresado los ciudadanos. Me refiero al Distrito Federal porque es la entidad en la cual ha arraigado mejor el régimen de libertades y concentra, en principio, la mayor densidad de ciudadanía de todo el país.

Un análisis de la distancia que hay entre gobernantes y gobernados puede comprobarse no sólo en la crisis de credibilidad que los sucesivos gobiernos federales han tenido en la capital, sino en la falta de confianza que hay en instituciones como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En una reciente encuesta² quedó claro que el 42% de ciudadanos no confían en la ALDF. Pero no solamente es el pobre desempeño de los diputados locales lo que explicaría la crisis de representación, sino también el reclutamiento de los propios partidos políticos. Si echamos un vistazo al origen de los diputados de la Asamblea, encontraremos que una proporción no desdeñable de los que integran la mayoría y la primera bancada de la oposición han hecho carrera en las delegaciones políticas (las que controla cada partido) y a partir de la gestión de clientelas se han asegurado un asiento en la Asamblea. Un buen número de diputados panistas y perredistas consignan en sus trayectorias puestos delegacionales y muy poco trabajo en las organizaciones sociales de base. Tienen el perfil de funcionarios y agentes electorales de sus partidos, mucho más que el de ciudadanos independientes que agregan demandas y que están en condiciones de escuchar el verdadero sentir de las personas que

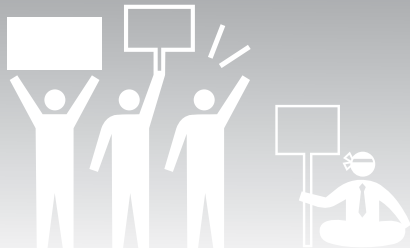
no están encuadradas en las estructuras electorales de control. Si esto pasa en la modernísima ciudad de México, en donde el gobierno lo ejerce un partido que dice tener vocación democrática, imaginar lo que ocurre en las entidades donde nunca ha habido alternancia es pensar en las profundidades del primitivismo político.

La crisis de representación se expresa claramente en la incapacidad de los partidos de presentar candidatos independientes y verdaderamente cercanos a la sociedad civil. Una buena parte de nuestros legisladores locales y federales son miembros del aparato y sus carreras dependen de las lógicas internas de los partidos políticos y no de la valoración ciudadana. Tal vez por eso, a ellos no les importe demasiado lo que la sociedad piensa de ellos y al mismo tiempo explica que la gente no se sienta representada por ellos.

Un último aspecto que vale la pena considerar es que las propias agendas de los partidos tienden a instrumentalizar cualquier embrión organizativo que despunta en la sociedad. El último caso fue el movimiento estudiantil del #YoSoy132, que perdió toda su frescura y se transformó en un instrumento de apoyo a un candidato y después en la punta de lanza de la denuncia en contra de otro candidato. El movimiento que consiguió dinamizar las campañas del 2012 y conseguir visibilidad en todo el mundo, perdió buena parte de su fuerza original para convertirse en un instrumento cada vez menos eficaz de denuncia.

En el Distrito Federal hemos tenido valiosos esfuerzos para desarrollar el tejido asociativo y

². <http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx>



BRÚJULA CIUDADANA

Conflicto social y crisis de representación política

fomentar la participación ciudadana que no han logrado cuajar. En por lo menos dos ocasiones se ha intentado fortalecer el asociacionismo entre los

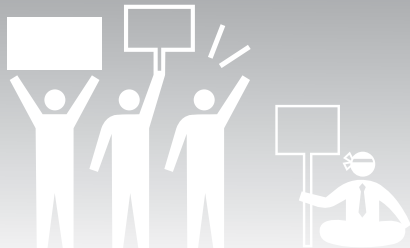
vecinos e invitarlos a participar en determinar prioridades presupuestales. El resultado ha sido poco alentador, porque una vez más nos encontramos ante la realidad de que el espacio vertebrador de ciudadanía fue en gran medida utilizado por los partidos políticos como una especie de elecciones primarias para reclutar liderazgos. De esta manera han vaciado de contenido el esfuerzo y han provocado una mayor desconfianza entre los ciudadanos.

Hay mucho camino que recorrer para reducir las distancias que hay entre gobernantes y gobernados. Un camino interesante a explorar es la creación de consejos económicos y sociales. Nuevamente me refiero a la experiencia de la capital, por no meterme en la historia reciente de otras entidades en donde el control gubernamental es casi total. La experiencia de una institución que procesara el diálogo social entre factores de la producción fue desvirtuada por el número de funcionarios que se aseguraron un asiento en el consejo. Una institución ciudadana dominada por funcionarios públicos es como una primavera sin golondrinas. El gobierno y los partidos deben renunciar a su ánimo controlador y hegemónico de todos los espacios y permitir que un tejido social autónomo y saludable dialogue con ellos. Si se suplanta la sociedad civil y se ahoga cualquier embrión de independencia y autonomía, tendremos más candidatos disciplinados y grises, pero cada vez más incapaces de generar confianza entre la sociedad y por tanto la apuesta es profundizar la crisis de representación.

Dialoguemos

ALBERTO NÚÑEZ ESTEVA
SOCIEDAD EN MOVIMIENTO
ALBERTO.NUNEZ33@GMAIL.COM

Venimos de un largo camino en donde imperaba el autoritarismo, la represión, la restricción a la libertad de expresión y todas aquellas características que dieron lugar a que Mario Vargas Llosa definiera el sistema político mexicano como “la dictadura perfecta”. El papel de la sociedad era inexistente pues tenía la bota represora pisando su cuello y aquellos que se arriesgaban a salirse de las reglas no escritas pagaban las consecuencias. El “Señor Presidente” era alguien colocado en un pedestal durante 6 años al cual no se le podía tocar ni con el pétalo de una rosa. Después de esos 6 años de virreinato gozando las mieles del poder, muchos de ellos fueron víctimas de su sucesor. Duras reglas no escritas, pero bien conocidas por todos aquellos que estaban en el poder o se acercaban a él. Recuerdo todavía una conocida frase del famoso líder sindical D. Fidel Velázquez “El que se mueve no sale en la foto”. Efectivamente, la última palabra la tenía “El Señor Presidente” quien era, entre otras muchas cosas, el que designaba a su sucesor, descalificando previamente a aquel o aquellos que tuviesen el atrevimiento de dar a conocer su pretensión de ocupar la Presidencia. Duros tiempos aquellos donde los amantes del poder, para sobrevivir en un mar de tiburones, tenían que aprender a convivir con ellos o, para efectos prácticos, transformarse en uno de ellos.



Conflicto social y crisis de representación política

El primer signo de apertura ocurrió durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en el que el “PRIato” perdió en las elecciones intermedias la mayoría en la Cámara de Diputados. La Presidencia de ésta la ocupó Porfirio Muñoz Ledo, quien en aquel entonces militaba en el Partido de la Revolución Democrática, después de haber gozado durante muchos años las mieles del poder dentro del partido hegemónico. En ese momento nació en México un niño llamado Democracia, al que teníamos que cuidar con esmero para que no muriese prematuramente, pues había muchos “malosos” que eso era lo que deseaban. Ese niño creció y dio un gran brinco al momento en que Vicente Fox ganó claramente la presidencia de la República, dejando en el camino a Francisco Labastida y a Cuauhtémoc Cárdenas. Algunos priístas ¿o muchos? tildaron de traidor al Presidente Zedillo por haber aceptado el triunfo de la oposición en vez de haber recurrido al tradicional fraude electoral que en ocasiones, como fue el caso de Chihuahua, lo calificaban como “fraude patriótico”, célebre frase expresada por Manuel Bartlet, en aquel entonces Secretario de Gobernación. Todo el sistema político no era sino un gran fraude encabezado por “El Señor Presidente” en donde el salirse de las reglas no escritas podía costar la vida a quien se atreviese a ello. Quien quisiera sobrevivir en ese lodazal, tenía que revolcarse en él y “comer mierda sin hacer gestos”, frase ésta que se le atribuye al Presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Duro camino hemos tenido que recorrer en búsqueda de la democracia, pero sin duda hemos avanzado mucho, a pesar de las tropelías manifiestas de quienes, como es el caso de muchos gobernadores, actúan, sin vergüenza alguna, al estilo del viejo PRI. El camino que nos queda por recorrer, a fuerza de ser sinceros, es todavía largo, muy largo, pero hay

que seguir recorriéndolo sin prisa pero sin pausa.

En ese camino se encuentra el diálogo entre las partes, como un instrumento que perfecciona y seguirá perfeccionando a nuestra incipiente democracia. Diálogo entre los miembros de la sociedad, y diálogo entre éstos y nuestros mandatarios y representantes. Un diálogo que se acerque cada vez más al siempre traicionado espíritu del artículo 39 constitucional que señala, en una interpretación libre, que el poder reside en el pueblo; que el poder debe ser ejercido por los mandatarios y representantes en beneficio de la ciudadanía. Bonito texto constitucional traicionado permanentemente por aquellos que utilizan el poder en su propio beneficio.

Los ciudadanos debemos aprender a dialogar entre nosotros. Un diálogo que se inicie en la definición clara del problema y continúe en su diagnóstico a fondo, en el análisis de alternativas de solución y en la presentación de una propuesta sólidamente construida y bien expuesta, capaz de generar la adhesión de ciudadanos y organizaciones ciudadanas cuyo peso conjunto logre, o pretenda lograr, la incidencia en las políticas públicas. Un diálogo que no busque el todo o nada, como sucede con frecuencia, sino el reconocimiento de que es en el análisis serio y con apertura de las discrepancias, donde más se aprende.

Tenemos que reconocer, a fuerza de ser sinceros, que la participación ciudadana en la política nacional es aún incipiente, debido, entre otras cosas, a nuestra propia cultura, pero debemos seguir avanzando lenta pero firmemente, transitando del análisis del problema, a la crítica, a la propuesta y, finalmente, a la acción. El ciudadano que no actúa es un inútil, decía Pericles, el famoso estadista que vivió y brilló



Conflicto social y crisis de representación política

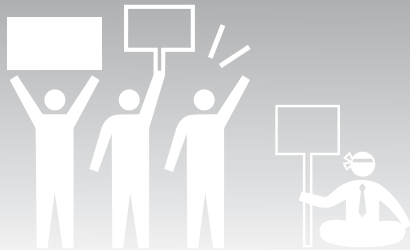
en la época de oro de la antigua Grecia, y yo estoy de acuerdo con él.

Nuestros mandatarios y representantes, por su parte y con sentido de urgencia deben también pasar del desprecio a la ciudadanía, a la aceptación del diálogo. Los déficits de representatividad y la falta de funcionalidad de nuestra democracia representativa es un asunto serio que debe ser atendido. Poner en tela de juicio el sistema representativo abre las puertas a la búsqueda de canales anti sistémicos para la expresión de las demandas, así como a la recepción favorable de propuestas autoritarias y populistas. De ahí la necesidad de reforzar la representatividad de las instituciones a través del apuntalamiento de la democracia participativa, esto es, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes e, incluso, la revocación de mandato.

Debemos reconocer que en algunos casos el déficit de representatividad ha alimentado el conflicto social al no ofrecer canales institucionales adecuados para la expresión y el procesamiento de las demandas. Pero no todos los conflictos sociales se pueden explicar mecánicamente como producto de falta de representatividad. El caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es elocuente. Hay conflictos sociales y manifestaciones diversas de problemas de gobernabilidad que, en realidad, son el producto de la convergencia de la afectación de los intereses de poderes fácticos y proyectos políticos anti institucionales que utilizan la demanda de diálogo no para dialogar sino para imponer la agenda maximalista del todo o nada con el fin principal de “exacerbar las contradicciones”. Por ello, el referente del Estado de Derecho es clave, el diálogo no debe ser

la coartada para evitar la acción de la ley cuando ésta debe entrar en juego.

La ciudadanía, poco a poco, va encontrando su camino y transitándolo. Para muestra basta un botón: en relación con la reforma educativa recientemente aprobada, varias organizaciones de la sociedad civil integraron un grupo denominado Juntos por la Educación, y con el apoyo –en aquel momento- de 220 organizaciones, publicaron un desplegado el martes 14 de mayo de 2013, en el que fijaban su posición, por una parte, en relación a la defensa de la educación pública y gratuita; de la exigencia de avanzar hacia un sistema educativo de calidad, capaz de construir equidad social y oportunidades para nuestros niños y jóvenes; y del respaldo a las autoridades para seguir adelante en la implementación de la reforma educativa que se estaba promulgando; y, por otra parte, la exigencia de que nunca se suspendieran las clases debido al enorme perjuicio que esto ocasiona a los educandos; el reconocimiento a los buenos maestros y el impulso a un Servicio Profesional de Carrera que valore sus méritos y promueva su capacitación, remuneración, incentivos y evaluaciones justas. Juntos por la Educación reunió finalmente a su alrededor a más de 350 organizaciones y con ello establecieron un diálogo constructivo con la Secretaría de Educación y, principalmente con los miembros del Congreso y sus comisiones de educación, el cual terminó, felizmente, en la aprobación de la Reforma Constitucional y de las leyes secundarias, muy a pesar del movimiento desestabilizador, que aún continúa, promovido por la CNTE -al cual ya hicimos referencia- organización cuyos propósitos e historial en materia educativa son una verdadera vergüenza.



Conflicto social y crisis de representación política

Los ciudadanos debemos tomar conciencia de nuestra importancia, de la importancia de nuestra participación razonada, de la importancia de nuestra incidencia en las políticas públicas, y de la responsabilidad que todo esto trae aparejada. Es a través de la conciencia ciudadana y su acción responsable como podremos desarrollar el enorme potencial que tiene nuestro país. Mientras lo dejemos en manos de los políticos, México tendrá un desarrollo mediocre e inmerso en la corrupción, algo de lo mucho que hemos padecido hasta la fecha. Llegó el momento de cambiar y este cambio exige nuestra participación y, a través de ella, la exigencia razonada hacia nuestros mandatarios y representantes para que sea la búsqueda del bien común la razón de ser de su actividad.

Las OSC como promotoras del dialogo entre gobierno y sociedad

MARÍA ELENA MORERA
CAUSA EN COMÚN AC
@MAELENA MORERA

Los últimos meses no han sido sencillos para los mexicanos. A los problemas estructurales se han sumado otros nuevos conflictos que agudizan la situación nacional y hacen más compleja la gobernabilidad del país.

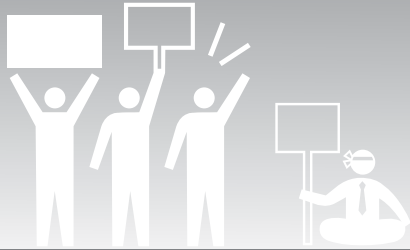
No obstante de este escenario estamos a tiempo de intervenir y cambiarlo para aspirar a un futuro mejor. En este contexto, considero que las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho por hacer para contribuir a esta mejora, principalmente pro-

moviendo el diálogo entre el gobierno y la sociedad.

La constante en México ha sido la desigualdad social, la pobreza que se agudiza en algunos sectores y la escasa movilidad social consecuencia de la falta de acceso a la educación y empleos bien remunerados. A esto debemos agregar el periodo de recrudescimiento de la violencia y la inseguridad en varias regiones del país que no se ha podido frenar como quisiéramos. Aún y cuando las estadísticas de incidencia delictiva refieren que los homicidios dolosos han disminuido, estamos conscientes que hay delitos que siguen mermando la calidad de vida de miles de mexicanos, como el cobro por derecho de piso, la extorsión, etc. Además, tenemos noticias de pueblos y comunidades que han caído en manos de la delincuencia organizada desplazando a las personas o sujetándolas a una vida sin esperanza.

Paralelamente, con el nuevo gobierno se han presentado una serie de iniciativas que no han logrado generar el consenso suficiente entre las partes involucradas y esto ha creado conflicto, descontento e inconformidad en distintos sectores sociales que incluso se manifiestan públicamente.

Estas manifestaciones causan efectos negativos en los ciudadanos, principalmente por la obstrucción a las vialidades, el daño a la vía pública, el cierre de comercios, etc.; Incluso se han registrado enfrentamientos que no han sido menores, hemos sido testigos de riñas entre policías y manifestantes, e incluso en algunas se han sumado periodistas y más ciudadanos. Por su parte el gobierno y nuestros representantes parecen cada vez más distantes de las preocupaciones de los mexicanos. Los vemos



Conflicto social y crisis de representación política

“hacer su trabajo” pero al parecer no están atendiendo las demandas ciudadanas o no han logrado establecer los canales adecuados de comunicación y esto ha generado descontento en la población.

Durante semanas los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el libre tránsito en distintas zonas de la Ciudad de México, lo que ocasionó que muchas personas no pudieran llegar a sus trabajos y que por ende sus familias no recibieran un ingreso por esos días, y generó pérdidas a los comercios y restaurantes. Ante esto, las autoridades no hicieron nada, fue como si no les importara el bienestar común y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Únicamente actuaron cuando ellos consideraron que era necesario hacerlo, es decir cuando tenían necesidad de ocupar la plancha del zócalo para llevar a cabo los festejos patrios.

Después de esta intervención nos queda claro que el gobierno no ha podido mantener el diálogo proactivo con los sectores inconformes, que no pueden o no quieren solucionar los conflictos mediante el diálogo porque cada vez se ve más embravecido el ambiente y si seguimos así, todo apunta a que las cosas se van a poner peor. No podemos permitir que se acreciente la violencia que generan estos enfrentamientos y que se disuelva aún más el tejido social.

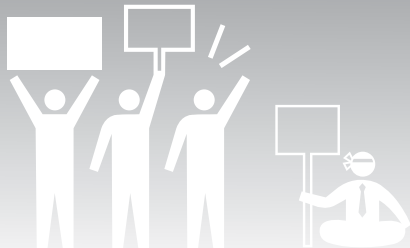
Debemos ser conscientes, que no podemos construir si estamos bajo la constante amenaza de que no seremos tomados en cuenta para las decisiones públicas, que no somos protagonistas de la construcción de consensos en este gobierno,

y que nuestros representantes son ajenos a nuestros intereses.

Al respecto de cómo las decisiones gubernamentales han omitido a los ciudadanos, quisiera mencionar la creación de la Gendarmería Nacional que se comprometió en el Pacto por México al inicio de este gobierno. Esta nueva corporación implica una transformación de fondo del orden público mexicano y por lo tanto consideramos que es conveniente el análisis de los beneficios y alternativas. Por esta razón, en su momento las organizaciones de la sociedad civil nos pronunciamos para señalar que una corporación de esta índole no puede crearse por decreto administrativo. Si bien nosotros optamos por la vía pacífica y la deliberación pública para colocar este tema en la agenda ciudadana, estamos conscientes que de no haberlo hecho tendríamos -como se había anunciado para el 15 de septiembre- una nueva corporación endeble y frágil por la carencia de legitimidad política y social.

Como se advierte, tenemos una comunicación frágil entre gobierno y sociedad que tenemos que remediar, porque solo conjuntamente podremos hacer frente a los problemas estructurales que tanto nos agobian.

Me resisto a afirmar que estamos ante una crisis, creo más bien que estamos en una etapa de ajuste en la que las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho que hacer para unir los eslabones entre gobierno y sociedad. Esto significa que tenemos una importante tarea para promover el diálogo entre ambas partes y tratar de frenar esto que no nos lleva a nada. Debemos tener claridad



Conflicto social y crisis de representación política

en las demandas de los sectores que están en descontento, de los alcances y viabilidad de sus peticiones para de esta manera evaluar la forma en la que podemos consensar las partes en juego. Además de asegurar la defensa de los derechos de los ciudadanos que inminentemente se han visto afectados por el conflicto.

En México hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en diferentes ámbitos, con ideologías y expectativas diversas, pero esto no es un impedimento para trabajar conjuntamente. Hemos sido testigos que podemos construir una agenda común para incidir en las políticas públicas. En 2012 llevamos a cabo la Cumbre Ciudadana cuyo objetivo fue justamente “dialogar y acordar una agenda común desde la ciudadanía que contemple entre otros puntos: demandas para nuestros gobernantes, una visión compartida de largo plazo para el país e integrar un frente común desde la diversidad”.

En este sentido, considero que las organizaciones de la sociedad civil debemos interceder en dos formas: por una parte retomar la agenda que logramos construir y consolidarla en programas y acciones que nos beneficien a todos, y por otra parte, debemos contribuir al debate con la información que nos dan años de experiencia en las temáticas en las que cada organización se ha consolidado.

En México las organizaciones de la sociedad civil son un indicador clave del capital social. En el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se refiere que hay 21,322 organizaciones, si bien no son demasiadas en relación a otros países, son suficientes para contribuir al debate informado

en diferentes temas. En relación a temas educativos, hay 8,796 organizaciones que tienen actividades de promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico, y que podrían contribuir directamente al debate del magisterio y proporcionar información sobre los alcances de las partes en conflicto. Asimismo hay organizaciones que trabajan sobre temas de seguridad pública y justicia penal, y otras que se involucran en la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal. Es decir, tenemos una base social que es amplia y que debemos aprovechar.

Las organizaciones de la sociedad civil son una ventana de oportunidad frente al conflicto. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2011, los conflictos violentos se ven ahora como un desafío clave para el desarrollo. Sin embargo, a través de la acción de las organizaciones de la sociedad civil se “pueden aliviar las tensiones que podrían derivar en un conflicto violento, participar en la resolución de los conflictos, y crear un sentimiento común de determinación una vez superado el conflicto a fin de evitar que surjan nuevas situaciones violentas”. Es decir las organizaciones de la sociedad civil tienen el poder catalizador frente a estos momentos de conflicto entre el gobierno y sociedad, y tienen la posibilidad de acercar a las partes al diálogo constructivo.

Requerimos abrir el gobierno para que sea más receptivo e incluyente y sumar a la sociedad para que exija ser representado por sus gobernantes y que sus intereses se vean reflejados en las políticas públicas e iniciativas legislativas.



Ante la política del cangrejo... ¿cómo avanzamos?

EUGENIA MATA
IDEMO, AC
MARUMATA@GMAIL.COM

El conflicto social es una expresión de la situación de crisis que vivimos en el país en los ámbitos económico y social, de descrédito de la clase política, cuyas acciones generan descontento y desconfianza hacia quienes tienen el poder de decidir, por cierto cada vez más centralizado. Del lado de la respuesta social, no hay un dilema de representatividad, sino más bien una gran diversidad de movimientos a lo largo del territorio, que reaccionan o resisten los impactos de megaproyectos, de las “nuevas formas” de explotación de los recursos naturales, que violentan los derechos a la tierra, al territorio, al desarrollo y a la consulta previa, libre e informada.

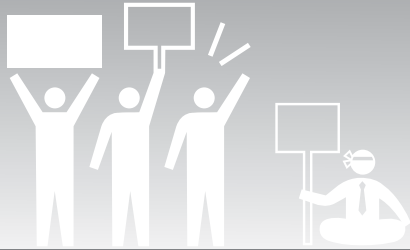
Algunos análisis recientes coinciden hoy en que las formas organizativas y estrategias o mediaciones para alcanzar demandas y defender iniciativas desde la sociedad civil, son diversas, expresión de la pluralidad y en todo caso de la búsqueda de salidas alternativas, distintas a las estructuras tradicionales, que por ejemplo, sostienen algunos sindicatos o federaciones campesinas.

Quienes por años nos hemos comprometido con el cambio social, desde nuestras específicas trincheras, aprendimos que los cambios por lo regular son graduales y por ello insuficientes, pero sin duda representan un avance en el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos, en el marco de la exigencia de llegar a un Estado de

derecho; aspiramos a conseguir un clima de apertura a la participación ciudadana y por ende, a la democracia deliberativa.

Tales avances no suponen la solución a todas las agendas y la superación de las grandes brechas sociales que aún padecemos, pero las muy diversas luchas sociales, territoriales y sectoriales, han sentado las bases mínimas para un horizonte de vida democrática y equidad social. Al lado de la movilización y la protesta social, hemos contribuido -de múltiples maneras- para presentar propuestas alternativas ante las y los tomadores de decisión; además desde el trabajo cotidiano con colectivos, grupos, organizaciones sociales y civiles, convencerles de que la defensa de sus derechos, pasa por incidir en las políticas públicas.

No obstante, cuando se aprueba una ley o medida que recoge total o parcialmente la demanda de la ciudadanía, ocurre que de otro lado, se está instrumentando una política pública que implica un retroceso en la salvaguarda y ejercicio de nuestros derechos. Así, en las últimas administraciones -incluida la actual- tanto en el ámbito federal como estatal, hablando del caso de Oaxaca, pareciera que -como el cangrejo-, retrocedemos en lugar de avanzar, no sólo por la orientación y enfoque de la política social y económica, sino porque los actores políticos, sean servidores públicos, representantes populares y particularmente los partidos políticos, han perdido la brújula, olvidando que fueron votados para trabajar a favor de los derechos y bienestar de la población; en su quehacer político privilegian sus intereses personales. Ni que decir de la falta de voluntad o resistencia para escuchar a la ciudadanía y comprender que no se puede gobernar sin la gente.



Conflicto social y crisis de representación política

Conviene recordar que siempre han existido voces críticas, esfuerzos por hacer contrapeso y vigilar a la clase política, por tanto no ha sido la falta de movilización, organización y capacidad de propuesta lo que ha faltado; por el contrario, es gracias a estos procesos y acciones, que las decisiones o medidas en contra de los intereses de las mayorías no ha avanzado más rápidamente. Sin embargo, hay que reconocer que las aceleradas medidas y reformas legislativas que se quieren aprobar –sin debate- y menos aún sin consulta a la ciudadanía, concentran a los movimientos, organizaciones sociales y ciudadanas en la resistencia, en la defensa de lo ganado en el pasado reciente o remoto. Adicionalmente estamos observando el franco deterioro no sólo del actuar de los actores políticos, sino el gran desencanto de la ciudadanía para pensar que realmente va a venir un cambio.

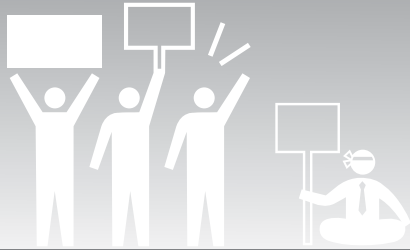
En efecto hace falta generar nuevas bases y condiciones para un diálogo entre sociedad y gobierno, que no tenga como telón de fondo el clientelismo partidario presente en las negociaciones y administración de los programas sociales; que la acción de gobierno sea para toda la población. Hace falta la convicción de las y los servidores públicos de avanzar hacia la gobernabilidad democrática; la confianza y voluntad de la ciudadanía de participar –de manera proactiva- en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Todo ello implica una nueva cultura política. Por ejemplo, que los pactos que se consideren necesarios, no solo se acuerden entre los partidos políticos, que incluyan a la ciudadanía, pero sobre todo que respeten la división de los poderes que nos dimos, un legislativo autónomo y un legislativo y ejecutivo fortalecidos por la consulta ciudadana efectiva, a la que tenemos derecho. Debieran ser verdaderos pactos sociales.

El movimiento social por su parte, necesita avanzar en generar alianzas y articulaciones sólidas, pero con un profundo reconocimiento de la diversidad y respeto de las múltiples estrategias de los grupos, organizaciones, frentes, etcétera, para hacer frente a las medidas de alto calado, como las reformas estructurales que están en el escenario, para repensar el modelo económico, para ofrecer una propuesta novedosa de desarrollo, para alcanzar un Estado de derecho, como se mencionó arriba.

Las organizaciones sociales y ciudadanas vemos claramente que las malas prácticas y los malos gobiernos provienen de todos los partidos políticos, por lo que más allá de quien esté en el poder, nuestra agenda es una que no se modifica, a menos que la petición o problema haya sido resuelto. La acción de contrapeso, contraloría social de las políticas o planes aprobados por los gobiernos son muy importantes, pero tendrán una utilidad y traducción práctica, cuando los gobiernos se comprometan a reconocerlas y procesarlas, en espacios de diálogo vinculantes.

Puede haber soluciones claras que enfrenten los retos actuales en torno a la situación del país, siempre y cuando exista voluntad política para procesarlas; lo que parece indispensable es sentar las condiciones mínimas para que éstas puedan operarse. Como integrantes de la sociedad organizada, me parece que parte de las exigencias ineludibles, estriban en seguir demandando:

- Recuperar la ética en la política; lo que significa que quienes son funcionarios/as, servidores públicos y representantes populares en todos los ámbitos de gobierno, deben gobernar para todos, combatir la corrupción y acabar con la impunidad.



Conflicto social y crisis de representación política

- Que las reformas y medidas a que haya lugar, estén orientadas al beneficio del conjunto de la población, acrecentando los mecanismos de participación ciudadana, - entre ellos la consulta-, que abone al camino de la democracia deliberativa y deje atrás el autoritarismo.
- Impulsar un Pacto Social, incluyente de la diversidad política y social, que priorice la eliminación de las brechas sociales y las brechas de género; la vida democrática, la desconcentración del poder y el Estado de derecho.
- Erradicar toda práctica de criminalización de la protesta social, ya que ha vulnerado de manera alarmante el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Ante la urgencia, ¿primero dialogar?

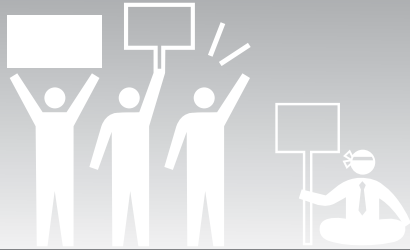
VÍCTOR M. QUINTANA S
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ@
VICTORQUINTANAS

De que hay urgencia nacional, hay urgencia. Los signos brotan por doquier, veamos nada más los más recientes: una enésima catástrofe social provocada por un fenómeno natural, como lo fueron los estragos de los huracanes Manuel e Ingrid, sobre todo en el estado de Guerrero. Los cada vez más ominosos presagios en materia económica, ya no sólo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, sino hasta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el sentido de que hemos entrado en un franco ciclo de recesión. La violencia que no cede y se sigue manifestando en feminicidios, ya no

privativos de la frontera norte, sino ahora hasta en la frontera sur, en el control del crimen organizado sobre amplios segmentos del territorio nacional; en la persistencia de masacres, extorsiones y secuestros que hacen que la gran mayoría de los habitantes de este país nos sintamos más inseguros que antes. La revuelta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de miles de maestros, padres de familia y estudiantes ante una supuesta reforma educativa que tiene todo de modificación administrativo-laboral y casi nada de educativa. La corrupción que aflora por todos los rincones de la República y que no repara en órdenes de gobierno y colores partidarios. La contestación creciente de las y los jóvenes, expresada, ya sea en forma callejera, ya sea en conductas de agresión a las autoridades, ya sea en frustración total ante el actual estado de cosas (y ese “actual” es largo ya de muchos años). La inminencia de aprobación de una Reforma Energética por las élites de los partidos o dominantes o sometidos, que no será más que una entrega de nuestros recursos energéticos a las empresas extranjeras. La persistencia de la extrema pobreza, de la desnutrición y de la malnutrición; la terquedad y exhibicionismo de la desigualdad social. Todas las asignaturas pendientes de este país han visto confluir lo importante y lo urgente.

Ante esta emergencia, se vuelve a hablar de un “diálogo nacional”, diálogo que, seguramente llevará a un pacto o a un gran acuerdo nacional. Ahora bien, ¿cuáles han sido las experiencias con respecto a los “diálogos nacionales”?

El más reciente es el que obtuvo en 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, con el Gobierno Federal. Fue acotado a las víctimas de la guerra calderoniana y



Conflicto social y crisis de representación política

a sus representantes. Sus logros más importantes a nuestro juicio son la visibilización de las víctimas de las violencias y la Ley de Víctimas. Nueve años antes, el Movimiento El campo no aguanta más, luego de varias semanas de intensas movilizaciones, incluidas toma de puentes internacionales y de la Cámara de Diputados, logró que se llevara a cabo en el Archivo General de la Nación, el Diálogo Nacional para el Campo con la participación de numerosas organizaciones campesinas, centros de investigación, instituciones de educación superior, comunidades rurales, etc. durante dos semanas. Culminó en un farragoso “Acuerdo Nacional por el Campo”, documento de compromiso entre muy diversas posturas de organizaciones campesinas, excesivamente detallado, que llegó a firmarse con Vicente Fox en abril de 2003 y, cuya parte medular, nunca se cumplió: sacar la agricultura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y establecer una política decididamente favorable a la agricultura campesina e indígena.

Anteriormente, a mediados de los años 90 se dieron varias rondas de diálogos, muy amplias, muy incluyentes entre el EZLN, los muy diversos grupos y organizaciones sociales que él convidó y los representantes del Gobierno Federal. Culminaron en los Acuerdos de San Andrés de los Pobres, muy significativos, con avances importantes en cuanto a Derechos y Cultura de los pueblos Indios. Sin embargo, a la hora de hacer Ley dichos acuerdos, la puerca del Senado de la República torció en rabo y la realidad legal quedó muy por debajo del producto de tan importantes diálogos.

En todos estos casos podemos decir que quienes representaron a la sociedad civil en los diversos

diálogos se involucraron totalmente y manifestaron una gran voluntad política para llevar a acuerdos, sin embargo, el Gobierno Federal, sí hizo patente su voluntad política para dialogar...pero nunca para llevar a la práctica los acuerdos emanados de los diálogos.

Por eso, habría que dar un giro a la perspectiva de esta cuestión y cambiar el punto de partida: para que un diálogo sea efectivo se requiere que quienes representan al Gobierno y a los sectores con más poder económico, político y mediático, den muestras efectivas, no de su voluntad de dialogar, sino de transformar las cosas, llevando a cabo unilateralmente, algunas de las respuestas a las demandas más significativas de los sectores sociales mayoritarios.

Ese sería el piso mínimo, la precondition indispensable para establecer la confianza necesaria para el diálogo. Porque, de lo contrario, la experiencia de la historia reciente muestra que los diálogos son procesos muy largos, complicados y muchas veces tienen un aterrizaje forzoso si es que no estallan antes de tocar tierra.

Vayan algunas de las dificultades y aporías que tendría que enfrentar un nuevo proceso de diálogo: ¿quién lo convoca? ¿A quién se convoca? ¿Quién decide quién representa a quién? ¿Cuáles son los puntos de agenda a privilegiar, pues cada sector o región va a demandar que sean los propios? ¿Cómo evitar que suceda lo que ha pasado con el Pacto por México en el que las cúpulas de los partidos sustituyen al Congreso? ¿Cómo decidir, por ejemplo, quién representa a los obreros, si los sindicatos oficialistas o los independientes?



Conflicto social y crisis de representación política

El resolver estas cuestiones puede ser muy largo y complicado. Sin embargo, no es necesario darle tantas vueltas a las cosas. Las demandas más sentidas por el pueblo de México no son tantas y son muy esenciales, se han expresado y reiterado en el espacio público una y otra vez. Por ejemplo, hay una convergencia enorme en que urge un incremento salarial de emergencia para restablecer el poder adquisitivo y reactivar el mercado interno; otra gran convergencia es que se necesita apoyar la agricultura campesina, productora de alimentos básicos; o realizar una verdadera reforma hacendaria que de verdad grave a quienes más tienen y establezca un sólido programa de austeridad con dedicatoria especial a los altos funcionarios de los tres poderes, o que se acabe con la impunidad de quienes desde el poder del Estado han asesinado, violado, ejecutado desapariciones forzadas; que desaparezcan los privilegios y la antidemocracia en los sindicatos; que haya un combate sin distinciones de ninguna clase a quienes se han enriquecido y enriquecen con los puestos públicos.....

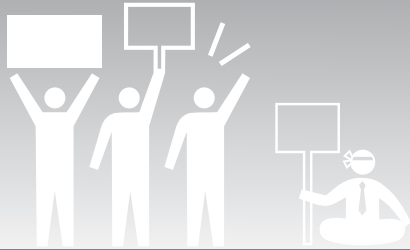
Para llevar a la práctica estas demandas-eje no se necesita ningún diálogo. El pueblo de México ya ha dicho su palabra una y otra vez en estos aspectos. Y la sigue diciendo en muchas otras cuestiones. La sociedad mexicana no ha estado muda: ha hablado, gritado y clamado. Es hora de que la escuchen y atiendan las demandas que ha expresado con toda claridad. No hay por lo tanto que dialogar para luego hacer; hay que hacer para demostrar que hay bases sólidas para luego dialogar.

Dialogar con quién? Crisis de régimen y localización de sujetos democráticos.

ALBERTO J. OLVERA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
AOLVERA@UV.MX

México vive una crisis de fin de régimen. Esta afirmación puede sonar extraña en un país que se ha acostumbrado a pensarse como democrático, producto de una larga transición a la democracia que finalmente ha dado como resultado una competencia electoral estable entre partidos institucionalizados. Sin embargo, si analizamos las características del sistema político vigente observaremos que el país vive en realidad los estertores de un largo proceso de fin de época.

El viejo régimen priista ha continuado vivo hasta nuestros días en sus instituciones más importantes. En primer lugar, el sistema corporativo y sus pactos. El régimen priista tuvo como elemento principal de su estabilidad política el establecimiento de un pacto con los sectores organizados de los trabajadores, de los campesinos y de los empresarios; en el caso particular de los trabajadores al servicio del Estado estos pactos se plasmaron en contratos colectivos extraordinariamente generosos, en la ausencia de exigencia laboral y la creación de una relación política especial entre el Estado y dichos sectores de trabajadores. Este acuerdo es particularmente visible en los campos de la educación, la salud y en las industrias paraestatales, especialmente PEMEX y la CFE. Este sistema ha tenido como consecuencia de largo plazo la privatización de las plazas de trabajo, costos impagables de sistemas de pensiones no financiados y la creación de una cultura laboral



Conflicto social y crisis de representación política

moral y materialmente corrupta, sin exigencia de responsabilidad. En el caso de los campesinos este pacto especial significó clientelismo generalizado vía reparto agrario subordinado (finiquitado hace 20 años), y manejo de subsidios selectivos y masivos en algunas áreas (particularmente en la industria cañero-azucarera), que con el tiempo fueron capturados de manera creciente por una burocracia intermediaria o terminaron apropiados de manera directa por empresarios agrícolas modernos, como demuestra el caso de PROCAMPO.

En el caso de los empresarios, los pactos implicaron que los grandes consorcios pagaran cantidades mínimas de impuestos, recibieran jugosos subsidios y que el Estado no aplicara los múltiples mecanismos de regulación económica, ambiental y laboral existentes en la ley. Un aspecto esencial del pacto con los empresarios ha sido la generalización de los contratos de protección y otras formas de violación sistemática de la legislación laboral, lo cual ha dejado en la desprotección a la inmensa mayoría de los trabajadores. Estas formas de relación particularista entre el Estado y los sectores organizados de la sociedad han continuado vivas hasta la fecha y constituyen el cimiento del corporativismo social y su cultura del privilegio y la violación de la ley.

El segundo elemento de sobrevivencia del viejo régimen es la Constitución de 1917, la cual, a pesar de haber sido reformada más de 600 veces en los últimos 25 años, en el largo ciclo neoliberal inaugurado por el presidente Carlos Salinas, ha conservado la esencia del régimen político: una división de poderes disfuncional, en la que el poder legislativo no logra ser un poder pleno, con efectivo control respecto del poder ejecutivo, debido en parte a la no reelección legislativa y en parte a la bajísima

institucionalización y pésima calidad de los partidos políticos; mientras el poder judicial tiene escasos recursos materiales y financieros y apenas en los últimos veinte años ha empezado su construcción institucional autónoma, si bien solamente a nivel federal. Por su parte, la constitución ha creado un poder ejecutivo fragmentado entre un ejecutivo federal con escasos poderes formales (sus poderes eran metaconstitucionales), un sistema de ejecutivos estatales que han adquirido una fuerza creciente en el ciclo de transición, sin contrapesos en los débiles poderes legislativo y judicial locales, y un ejecutivo municipal que constituye el eslabón más débil del Estado mexicano, y cuya absoluta disfuncionalidad no ha sido ni siquiera puesta en tela de juicio. El gobierno resultante se ha caracterizado por su profunda improvisación, baja calidad y nula capacidad de rendición de cuentas.

Este orden de cosas establecido en la constitución de 1917 garantiza una operación autoritaria del Estado, pues ha permitido que el poder ejecutivo carezca de contrapesos efectivos en los otros poderes, y en todo caso lo que hemos experimentado en el largo ciclo de transición es la traslación del poder efectivo de gestión de los recursos desde la Federación a los estados, en donde el problema de la falta de contrapesos se ha agudizado a niveles extraordinarios. Del presidencialismo absoluto pasamos al “gobrnadurismo” absoluto, el cual ha resultado aún más trágico para el país.

En suma, lo que hoy padece México es la crisis del viejo orden autoritario, un orden que no logró ser modificado a lo largo del proceso de transición, durante el cual, lejos de fomentarse nuevas prácticas e instituciones democráticas, se generalizó la cultura priísta del particularismo generalizado y de la corrup-



Conflicto social y crisis de representación política

ción sistémica, hoy extendida a todos los partidos y a todos los niveles de gobierno. En consecuencia, el país vive una crisis de régimen que solamente puede ser resuelta mediante la modificación radical de su orden constitucional y poniendo fin a los viejos pactos corporativos que han sustentado la estabilidad política del Estado mexicano.

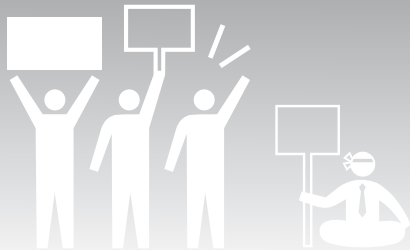
En la coyuntura abierta por el regreso del PRI al poder ejecutivo federal, el Presidente Peña Nieto ha planteado una agenda parcial de reformas que buscan el reflatamiento del viejo sistema y no su reforma radical. El nuevo gobierno plantea modernizar los pactos corporativos, poniéndole nuevos límites, mientras por otro lado se fortalece la capacidad de comando del gobierno central por la vía de la recentralización del gasto público, el desempoderamiento de los gobiernos estatales y la actualización del presidencialismo más o menos absoluto. Se trata de una estrategia conservadora que, si bien se ve obligada a atacar algunos de los cimientos del régimen, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), o proponer una reforma fiscal que afecta a los empresarios, lo hace en aras de restablecer el presidencialismo, proyecto que no corresponde con la aspiración de la construcción democrática de México.

El país vive en este momento un grave problema de legitimidad del régimen político en su conjunto y no solamente de una de sus partes. Lo que está en crisis es el sistema de partidos y el modo de convivencia política que han establecido esos partidos con los ciudadanos a partir de la reforma electoral de 1996. La respuesta popular a los intentos parciales de reforma que ha planteado el gobierno de Peña Nieto demuestra la capacidad de resistencia de las

fuerzas que prosperaron en el orden corporativo, incluida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es una de sus derivaciones. Lo más sorprendente de la coyuntura actual es que la única fuerza política reformista -pero en sentido conservador- es el propio gobierno federal, mientras que las otras fuerzas políticas aparecen casi todas como conservadoras de un viejo orden que es precisamente el que se debe cambiar.

Ahora bien, el reformismo de Peña Nieto consiste en una estrategia elitista de pactos políticos entre direcciones de partidos, que hace caso omiso de las instituciones representativas (parlamento federal y cámaras de diputados estatales) y plantea un proceso de cambio de arriba hacia abajo, sin consideración alguna por la opinión de los actores sociales, económicos y políticos del país. La estrategia del nuevo gobierno consiste en abrir lo menos posible el diálogo nacional en aras de imponer desde arriba un proceso de reforma que pueda ser administrado por un sector de la clase política que se considera a sí mismo ilustrado y capaz de vencer las resistencias al cambio. Un cambio recentralizador cuya agenda consiste en concluir el ciclo de las reformas neoliberales y modernizar parcialmente la administración del Estado, con el fin de propiciar una modernización relativa de la economía en el mediano y largo plazo.

En esta circunstancia es muy difícil pensar en el establecimiento de mecanismos de diálogo efectivos entre una sociedad organizada básicamente conservadora de los viejos pactos y una clase política también conservadora, cuyo único componente modernizador es francamente autoritario. Debe reconocerse que el contexto actual del país plantea



Conflicto social y crisis de representación política

una situación desfavorable para el diálogo nacional y favorable para la emergencia de numerosos conflictos que expresan, en medio de muchos otros conflictos sociales, la resistencia de los actores sociales y económicos afectados por los proyectos modernizadores. Las fuerzas democráticas del país se encuentran en minoría absoluta y en la más completa confusión programática.

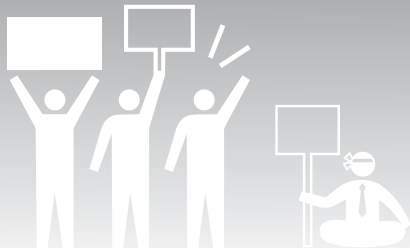
Es urgente pensar en el establecimiento inicial del espacio de diálogo al interior mismo de la sociedad civil, cuyos distintos componentes carecen en este momento de un eje articulador programático favorable a una verdadera democratización de la vida pública. Es imprescindible que en este momento se debatan los cambios que requiere el país, pero no sólo en la clave de la resistencia a los proyectos modernizadores tecnocráticos, sino en la búsqueda de las transformaciones constitucionales e institucionales necesarias para democratizar la vida pública. En este sentido es importante establecer prioridades en las agendas de democratización.

En primer lugar, hay que abrir el ostión de la clase política a través de espacios en donde una clase política emergente pueda expresarse de una manera autónoma a los partidos, hoy día controlados y capturados por una burocracia impermeable a la influencia de la sociedad. Para tal fin ya se han planteado medidas apropiadas, entre otras, las candidaturas independientes a nivel municipal y estatal y para diputaciones locales, que pueden ser una vía de formación de una clase política emergente.

En segundo lugar, puede correrse el riesgo de abrir facilidades para el registro de otros partidos. Si

bien la multiplicación de partidos no es conveniente en general, como lo demuestra la historia política mundial, en el caso particular de México es imprescindible crear espacios para nuevas fuerzas políticas que puedan aportar proyectos y liderazgos alternativos, por lo menos desde los espacios estatales y locales. Para este fin es también indispensable que se concrete la reforma política de la Ciudad de México, de tal forma que en el nuevo estado se puedan crear partidos locales y candidaturas independientes, que posiblemente podrían permitir el paso a un ciclo de renovación de una clase política increíblemente atrasada en la capital de la República.

Por otra parte, es imprescindible poner en operación las 25 leyes de participación ciudadana que ya existen a nivel estatal en México y crear su equivalente federal, y no porque estas leyes automáticamente vayan a permitir un renacimiento de democracia local, sino porque su uso sistemático puede ser una de las vías a través de las cuales los actores de la sociedad civil emergente puedan introducir nuevas agendas y nuevos debates en la esfera pública. Es cierto que la mayoría de las leyes de participación ciudadana son muy limitadas y limitantes, pues establecen requisitos para activar mecanismos de democracia directa casi imposibles de alcanzar y plantean formas de participación cotidiana muy acotadas. No obstante, es importante plantear la posibilidad de usar esas leyes en un sentido constructivo y cooperativo. Además, es importante pensar en grandes alianzas multisectoriales al interior de la sociedad civil en un contexto en el cual los propios actores actúan de manera fragmentada y dispersa, tanto temática como geográficamente. Es importante un momento de unificación y debate



abierto entre los múltiples grupos y corrientes, a partir del reconocimiento de que la sociedad civil realmente existente es políticamente plural, organizacionalmente muy pequeña y con escaso poder de convocatoria social.

Es importante abrir espacios de diálogo intra-sectorial antes de pretender hablar con un Estado que, como hemos visto, carece completamente de interés de dialogar con la sociedad civil. Para que un diálogo con el Estado haga sentido es preciso primero construir un frente social que tenga la capacidad política efectiva de establecer una agenda que el propio Estado respete. En este proceso será imprescindible construir puentes entre los actores de la sociedad civil, las universidades públicas y los medios de comunicación formales e informales, que permitan crear las condiciones necesarias para ese diálogo interno. Este proceso puede ser acompaña-

do por algunos miembros de la clase política a título personal y eventualmente tal vez por alguno de sus partidos, a condición de que se establezca una clara relación de respeto con los actores de la sociedad civil. Cualquier otro planteamiento será objeto de la sospecha fundada de colonización política, que ha sido la práctica dominante en los últimos años en la vida política de la nación.

Finalmente, aunque no al final, es necesario volver a discutir la necesidad de un proceso constituyente. Pero este debe ser el resultado de la movilización de una sociedad civil democrática, y por tanto un proceso a mediano plazo, que hoy por hoy carece de condiciones de posibilidad. Una nueva constitución debe sintetizar un proyecto democrático que ponga fin al siglo del corporativismo y a todas sus lacras morales, políticas y culturales. ➤



Ante la Urgencia Nacional, un diálogo progresivo, propositivo y abierto.

ADALBERTO SAVIÑÓN DÍEZ DE SOLLANO

CENTRO LINDAVISTA

ADMINISTRADOR@CENTROLINDAVISTA.ORG.MX

“Cuando Juan O’Gorman ideó el mural que envuelve a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, solicitó, por medio de la Secretaría de Educación Pública, el apoyo de los estudiantes de primaria de todos los pueblos mineros del país para recolectar piedras de diferentes colores. Cientos de niños se sumaron al esfuerzo y los patios de los colegios se vieron invadidos por toneladas de rocas de 13 tonos distintos que se enviaron hasta la ciudad de México para que con ellas el pintor y arquitecto creara una portentosa gráfica de más de 4 mil metros cuadrados. La anécdota ejemplifica la mística que imperaba en el país a mediados del siglo XX: se respiraba un ánimo de optimismo promovido desde el gobierno y compartido por amplios sectores de la sociedad. (La Jornada 2012:3).

En el mismo diario pero del 17 de febrero de 2013 apareció una foto de un niño arriba de una tanqueta del ejército en el Zócalo probando una ametralladora.

Inicié el texto con dos hechos que creo iluminarán las reflexiones que quisiera compartir sobre la cohesión y la necesidad de diálogo social en nuestro país. La primera muestra una época y cómo surgía una acción cohesionadora que iluminaba el imaginario colectivo. La segunda a qué convoca y a qué educan los gobiernos actuales a nuestros niños y jóvenes hoy.

Esa es una faceta de nuestra urgencia nacional, hay otras, como el proceso del despertar social a la participación y la democracia, obstaculizado por acciones de fuerzas que nunca lo han aceptado, por ineptitudes de quienes lo promovían y por la falta de reflexión colectiva sobre el tema. El crecimiento económico basado en una derrota aceptada de antemano (no servimos para la modernidad, para la tecnología...) con una fe ciega en lo que viene de fuera y que a cambio de lo que nos dan, ofrece la mano de obra barata, las concesiones y la “hospitalidad” como lo único para lo que somos buenos. También la profunda desigualdad aceptada como la normalidad, crecientemente “americanizada” y “racializada” (Quintero Romo:2011). A diferencia de las explosiones revolucionarias, las implosiones no destruyen la trama de instituciones, normas y procesos de la sociedad, pero reducen su eficacia y legitimidad (Ratinoff, 2004). Por ello las acciones y políticas que buscan el cambio frente a estas urgencias tienen que realizarse a muy diversos niveles y no puedan circunscribirse a un solo aspecto o a un solo nivel.

Debemos abrir todos los medios de educación y formación para que transmitan la vinculación entre la vida cotidiana y el sistema colectivo, lo que Sagovsky llama la “capacidad social”. Proponemos por ello que se desarrollen, mediante el diálogo, capacidades sociales de análisis, crítica y diálogo sobre las “estructuras” realmente existentes en el país para transformarlas.

Las violencias deben verse bajo una óptica de que son fruto de una enfermedad social que se combate bajo criterios de salud pública. La aguda pobreza es también una enfermedad social y resultado de injusticias, desigualdades, faltas de



Tareas de la sociedad civil

cohesión y responsabilidad social. Seamos o no de izquierda, seamos o no liberales, seamos o no cristianos, el enfoque hacia el conjunto de la sociedad, con los pobres primero es una necesidad que todo planteamiento, toda propuesta, requiere tratar prioritariamente. La Cruzada Nacional contra el Hambre debería haber convocado a todas y todos a un profundo cuestionamiento y diálogo sobre este tema, no a adormecernos “dado un poco más”. Es indispensable un diálogo social cuyo tema central sea la pobreza y la desigualdad.

El que la situación cambie depende de medidas gubernamentales y de movilización ciudadana responsable. Ante la ausencia actual de ambas, debemos movilizarnos y reconstruir en el imaginario colectivo a una sociedad y gobierno agentes activos y no espectadores pasivos del devenir. Como una respuesta a esta problemática se han venido organizando en diversas ciudades de México esfuerzos de constitución de redes de actores (universidades, escuelas, organizaciones sociales y empresariales, iglesias, grupos profesionales, organizaciones de barrio) que dialogan sobre las causas de las violencias en sus ciudades y regiones y propongan planes a realizar entre todos los actores sociales para prevenir las violencias y crear espacios de paz. Esto responde a la necesidad de mejorar la capacidad interna de las comunidades locales para reconocer sus futuras trayectorias de desarrollo y expresar de manera coherente sus necesidades colectivas.

A lo largo de los últimos doce años numerosos actores sociales e intelectuales han intentado realizar acuerdos en nuestro país (sólo en 2006 recordemos a Carlos Slim y el Pacto de Chapultepec, el “Cuarto de Paz”, el Diálogo Democrático Nacional y los numerosos desplegados aparecidos en los

diarios). La mayoría de las veces estos acuerdos no parecen haber rendido frutos ante la opinión pública, no se han visto sus resultados. Pero cada uno ha construido un ladrillo de un puente que es necesario reforzar cada día. Quienes buscan acuerdos reconocen que las soluciones son un asunto de Estado, de instituciones y ciudadanos, por lo que las acciones deben ser concebidas de manera concertada entre sociedad y gobierno.

No es necesario descubrir el hilo negro, sólo veamos las experiencias y aprendizajes de los acuerdos que se han intentado tanto en México como en el mundo y también los desafíos que enfrentamos. Así evocaremos hoy los procesos que nos comparte Adam en Sudáfrica, o en Guatemala y Colombia y le han enseñado “cómo un conjunto de líderes de todo el espectro del sistema social, podían, aun en el contexto más conflictivo y desafiante, ejercer un poder colectivo para transformar el sistema hacia uno mejor.

Adam nos comparte cómo en India se buscó focalizar a la nación en resolver la desnutrición infantil, y cómo ese esfuerzo unía actores de todos los niveles y visiones sociales de manera tal que empezaron a colaborar, y poco a poco se les fueron abriendo los ojos hacia la necesidad de colaborar en otros muchos aspectos necesarios para resolver el problema inicial que los unió. Esta dinámica es importante para avanzar de una manera diferente a la que hemos buscado en México. Aquí hemos buscado acuerdos globales, de manera simultánea, casi como si elaborásemos un listado de regalos de navidad en la que siempre haya regalos para todos, en donde se contemplen todos los temas. La experiencia que nos narra Kahané nos abre a la posibilidad de plantearnos algunos acuerdos parciales en que los participantes luchen por objetivos más amplios.



Tareas de la sociedad civil

El pequeño “Pacto por México” tiene que irse transformando, ampliando y limpiando el lodo y paja a través de pasos parciales para llevarnos a un gran acuerdo de todas y todos los mexicanos sin protagonismos, sin exclusiones, sin temas excluidos, la única condición para avanzar es compartir el método pacífico y la búsqueda real de la justicia para un México de todos. Podemos iniciar dando pasos para un Acuerdo contra el hambre...o algún otro tema toral, o acuerdos regionales y llevando estos aprendizajes a una mayor amplitud.

De no hacer algo así, podemos repetir la experiencia del imperio español, a finales del siglo XVIII, como nos lo narra Alfaro: (...) la prueba de fuego de las sociedades consiste en su flexibilidad para reconfigurarse a sí mismas en el momento en que su acuerdo fundacional alcanza su caducidad: (...) El imperio español tuvo la angustiada conciencia de haber alcanzado ese tope fatídico hacia el último tercio del siglo XVIII; emprendió entonces una vertiginosa carrera de modernizaciones que fueron ejecutadas de manera autoritaria y que obtuvieron tal éxito que transformaron a fondo el sistema imperial, tanto que acarrearón su hundimiento.

Retos para el diálogo nacional desde los actores sociales

MIGUEL ÁLVAREZ GÁNDARA

SERAPAZ

MIGUEL.ALVAREZ@SERAPAZ.ORG.MX

A) Rasgos de la situación actual

De la coyuntura a la estructura: una nueva sociedad

Permítanme colocar algunos rasgos generales para basar en ellos mis reflexiones sobre la problemática del diálogo y actores nacionales.

En primer lugar, es importante reconocer que México vive un momento crucial y complejo que no puede ser comprendido sólo viendo la intensa coyuntura. Se requiere mirar profundamente la dimensión y problemática estructural.

En ese marco, debemos asumir que la propia sociedad mexicana ha cambiado. A lo largo de los años se ha desarrollado siguiendo diversos rostros, rasgos y agendas, tales como la indígena, el género, los derechos humanos, el medio ambiente, los jóvenes, la democracia, la seguridad, las víctimas. Así, han cambiado las normas, criterios, valores y prioridades sociales. Podemos decir que la sociedad mexicana es hoy más participativa y horizontal, está más pendiente de los derechos humanos, está más atenta de los temas públicos y las demandas sociales.

Por supuesto, no todas estas agendas y rostros han madurado como sujeto colectivo y de conjunto, pero es claro que ante esta diversidad de temas y



Tareas de la sociedad civil

problemáticas han surgido nuevos actores que no pueden ser comprendidos ni reconocidos por las viejas estructuras políticas y de representación de etapas históricas que ya pasaron. Debemos pues reconocer que existen nuevos sujetos con nuevas claves, en una gran diversidad y poder social que trasciende los temas coyunturales.

De la reconfiguración de los actores

En segundo lugar, debemos reconocer la situación actual de polarización y violencias, que expresa y debilita aún más a los viejos liderazgos y formas de representación. Hace tiempo no bastan los partidos para reflejar las necesidades políticas y sociales, por lo que los todos los actores sociales han tenido que actuar por sí mismos y expresar con su propia voz sus demandas y propuestas. Ante las violaciones y violencias, así como ante las variaciones y disputas del contexto, los actores sociales han aprendido a revisar su conformación, proyecto y articulación, lo que se hizo más urgente y visible ante las diferentes implicaciones del regreso del PRI. Esta revisión o ajuste de propuestas, discursos, estrategias y alianzas acrecienta la fuerte efervescencia y movilización que cruza todo el país.

De los actores históricos a los nuevos rostros

En tercer lugar, esta polarización y violencias no sólo han movido a los actores y sus causas -acelerando por supuesto la conflictividad temática-, sino que los ha forzado también a asimilar un enfoque articulador y multi-temático para participar en la dimensión nacional, expresando problemáticas y agendas

estructurales con rostros nuevos.

Hoy la gran disputa es de conjunto y estructura. Sin embargo, pasa por la coyuntura, convirtiéndola en una dimensión estratégica y de diseño de mediano plazo, más allá de una mera situación transitoria, secundaria ó táctica. En la disputa de estas coyunturas se ponen en juego las grandes líneas estructurales y de conjunto; en otro sentido, la gran disputa estructural requiere de ir ganando y dominando las coyunturas. Los actores importantes disputan en ambas dimensiones.

De la conflictividad a la transformación

Las conflictividades son de diverso tipo e intensidad, y en su naturaleza expresan la etapa, no sólo en cuanto la relación entre sujetos, sino también en la búsqueda de abrir condiciones, rutas de solución y procesos orientados a las causas de los problemas sociales. Ha vuelto el quehacer político, pero las rutas de fondo siguen exclusivas y cerradas. El régimen y el modelo económico se atrincheran.

Agregado el abismo entre el Estado dependiente y en crisis respecto de nuestra sociedad en mutación, y ante el hecho real de la violencia y el temor, de la inquietud y la desesperanza, de la desconfianza y la resistencia, vemos sin embargo cotidianamente la búsqueda de acciones autónomas o de propia mano, en ruta alternativa y ya no solamente de resistencia. Ante la diversificación de las violencias y cerrazones, crece la ira y la inconformidad, que se expresan en todo nivel y tipo de situaciones. La polarización y los conflictos que se viven hoy en día expresan el álgido y exigente estado de ánimo de la sociedad.



Tareas de la sociedad civil

B) Problemática de un proceso de diálogo nacional

La agenda nacional está fragmentada.

Los hechos recientes han evidenciado que los actores sociales están activos principalmente en torno de sus espacios y agendas gremiales, sectoriales o particulares. En este contexto de agenda y movilización fragmentadas debemos reconocer además que ninguna de esas problemáticas se podrá resolver de fondo si se plantea aisladamente. La mejor prueba de ello fue la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

Existe una intensa interconexión entre las problemáticas estructurales, pero como actores sociales no estamos teniendo el nivel de visión, propuesta o articulación del tamaño y calidad necesarios. Tampoco tenemos entre nosotros un espacio y diálogo que nos permita analizar la problemática en su conjunto. Es decir, hasta ahora nos movilizan las agendas particulares, dificultándonos más aún actuar en los escenarios definitorios. El problema principal radica en crear las condiciones y la maduración de los sujetos sociales hacia el conjunto de la problemática nacional. Las identidades, diversidades y regionalidades han de ser base de esta visión de conjunto.

Sin embargo, el régimen político como tal no ha cambiado, y en este sentido preocupa el regreso del PRI y de las viejas prácticas, incluidas las de la izquierda, pues vuelven a impulsar a los partidos políticos como los únicos actores que pueden jugar en la gran cancha. El Pacto por México es un acuerdo entre actores partidarios, que no tienen la sensibilidad ni interés para incorporar la agenda

nacional de los actores sociales, ni siquiera para una consulta o el fomento a la participación. Este régimen para continuar sigue requiriendo dispersar a la sociedad y de mantenerla contenida al nivel de pequeños actores.

Lo que necesita México es justo al revés. Queremos de un nuevo régimen político diseñado y ejercido con los actores sociales. En un proceso de transición democrática se necesita del crecimiento de los actores sociales reconocidos como actores necesarios y representativos de las distintas visiones, posturas, intereses, clases y culturas. Actores sociales en uso de la política pero más allá del corporativismo y de la lógica de las cuotas, los equilibrios parlamentarios o los intereses de los partidos. Actualmente, no hay formas de diálogo ni formatos o espacios de participación porque en el fondo no hay una visión de diálogo y negociación, que se limita al Pacto por México y al peso electoral.

Procesos y actores desfasados

Otra manera de decir lo anterior para los sujetos se puede hacer a través de una metodología muy sencilla, que se usa en el mundo de los conflictos armados y la paz para ubicar en un triángulo con tres niveles dónde está la problemática principal. Así, es claro que en México existe hoy una base muy amplia y diversificada de movilidad y organicidad social, expresada en torno de diversos derechos y agendas a través de una creciente e indignada participación popular y ciudadana, a pesar de no ser visible ni debidamente reconocida.

Existe también un vigoroso “track 2” conformado por articulaciones nacionales y sectoriales, mayor



Tareas de la sociedad civil

o menormente movilizados, tales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros frentes como la Proclama por el Rescate de la Nación, que alimentan de sus vínculos con el mencionado “track 3” y procuran incidir como actores e interlocutores directos en temáticas específicas para modificar rumbos y prioridades de carácter nacional que les afectan o alteran el caminar soberano y justo de la Nación.

Ese nivel definitorio y resolutivo en el que se pretende incidir, el llamado “track 1”, que es el del poder es, sin embargo, un espacio muy reducido y reservado a los grandes grupos de interés económico y político. El problema es que en este “track 1” no están representadas la sociedad o las articulaciones de los tracks 2 y 3, como tampoco se incluyen sus demandas, derechos o visiones, por lo que se rompe el proceso de representación y participación de los propios sujetos y las propuestas sociales.

Asumir entonces que la nueva realidad de la sociedad mexicana implica indudablemente reconocerla en un fenómeno de organicidad diversa. A pesar de la polarización y las violencias, los tejidos sociales han cambiado de forma y han generado nuevos espacios de expresión, al margen de las institucionalidades. Este fenómeno se observa no solamente en la informalidad económica, sino también en la política, la espiritualidad o la cultura. Aquí tienen cabida la mujeres, los indígenas, los campesinos, las víctimas y otros actores nuevos y necesarios. El momento actual y el futuro de México se han alejado de los modelos clientelares, asistenciales o corporativos que los poderosos quieren conservar. Es mejor para la dignidad, la justicia y la democracia que se abran estas amplias avenidas políticas que reclaman los actores sociales.

C) Retos hacia un diálogo nacional con base en las agendas y sujetos sociales

Ante tales complejidades, se antojan las siguientes reflexiones y retos:

1. Es importante reconocer que ante la crisis del Estado Mexicano, el Pacto por México ya dio lo que podía dar. Ahora es momento de abrir otros formatos de actores y agendas sociales que animen procesos inclusivos y plurales de participación, partiendo del dialogo desde la lógica del respeto y la diferencia, hacia la generación de otras formas de disputa, consenso y acuerdo. Los problemas estructurales del Estado no se van a corregir con reformas particulares de corte neoliberal. Se necesita una visión de conjunto hacia un nuevo proyecto de nación que se transforme y vincule desde las distintas problemáticas y visiones sociales.
2. Para lograr lo anterior, hace falta un salto cualitativo en los propios sujetos sociales. Sin sujetos maduros no hay cómo resolver las conflictividades ni los retos estructurales. La pregunta es, ¿están listos los actuales actores políticos y sociales para ello? ¿De qué depende? Allí es donde entiendo el sentido del diálogo nacional, primeramente al seno de la sociedad misma potenciada en sus sujetos. A lo largo de mi experiencia en SERAPAZ he aprendido que no hay posibilidad de resolver los conflictos sin la interrelación y maduración de sus actores. No es suficiente la suma de problemas, demandas y voluntades; se deben generar las condiciones para subir el nivel de las propuestas y de la interlocución. El reto radica en generar las condiciones de un pro-



Tareas de la sociedad civil

ceso de maduración generalizado que permita trascender las visiones sectoriales y promueva la articulación con otros para configurar los nuevos sujetos sociales necesarios para impulsar y procesar las grandes transformaciones que puedan resolver nuestras crisis y rescatar nuestra Nación.

3. En el México actual se constata la dificultad para implementar estas dos reflexiones. Simplemente, los poderes, los partidos y los medios no comprenden ni involucran a los actores sociales. Se atiende y visibiliza a los liderazgos de los políticos y los poderosos, mientras que a los actores sociales se les ignora y desestima en su derecho y valiosa propuesta ante las causas estructurales. Ante esta crisis y vacío de las vías y de los actores políticos es que se abren otras rutas y formas de lucha. Esta disyuntiva es también crucial. La democracia electoral y en torno de los partidos es totalmente insuficiente y canaliza ficticiamente a la lucha social, que se expresa así en formas audaces y rebeldes.
4. Con todo, no podemos ser ingenuos. La diversidad y desconfianza es tal que no todos querrán ir a un proceso formal de disputa, diálogo y de acuerdo. Nadie tiene la solución para todas nuestras crisis; tampoco el Pacto por México.

Necesitamos otro tipo de Pacto Social que parta de una verdadera agenda nacional de transformaciones vinculadas y vinculantes, que incluya la propuesta y el sentir de la sociedad en toda su amplitud. Es imprescindible también definir una ruta de acción, no es suficiente pactar una condición de diálogo y participación. Es urgente pactar un proceso que incluya formatos, tiempos y espacios, más allá del ámbito capitalino, que logre reconocer al país en sus regiones y diferencias. Hoy, la clave no se encuentra en las mayorías o en la uniformidad, sino en cómo tejemos lo común a partir de lo diverso y disperso. Este es el real reto para la conformación de un nuevo Estado y una nueva sociedad en una lógica de paz con justicia y dignidad que resuelva las causas y no solamente administre los efectos o las correlaciones coyunturales. Así, el paso prioritario, y terreno principal, es lo que hagamos como ciudadanos al seno de la sociedad y sus sujetos.

Todos podemos y debemos avanzar en la ruta de lo político para construir el México que queremos. No habrá un verdadero cambio si no reconocemos y usamos nuestra propia voz y capacidad de lucha, propuesta, representación, movilización y articulación social y ciudadana. Por allí pasa el reto de la soberanía y unidad nacional.



Una visión ciudadana sobre petróleo e impuestos

RAFAEL REYGADAS ROBLES GIL
INTEGRANTE DE ALIANZA CÍVICA Y DEL CONSEJO
CIUDADANO DE LA CONSULTA NACIONAL
REYGADAS@LANETA.APC.ORG³

Los orígenes de la Consulta Nacional Ciudadana

Frente a las más diversas propuestas de reforma energética y fiscal surgidas de intereses privados y presiones de empresas nacionales y transnacionales, pero también de la iniciativa de millones de ciudadanos y ciudadanas por dar un rumbo cierto y soberano y una estrategia de largo plazo a la política energética y fiscal, organizaciones sociales, campesinas, ecologistas, populares y civiles del país y corrientes de base del Partido de la Revolución Democrática y de otros partidos políticos, propusieron a la coordinación nacional de Alianza Cívica que facilitara y organizara una Consulta Nacional Ciudadana sobre Reforma Energética y Fiscal, a fin de conocer la voz ciudadana sobre estas cruciales problemáticas, antes de que se llevara a cabo una discusión limitada a los espacios del poder legislativo, sesgada y controlada por el Pacto por México, que representa a una cúpula de los partidos políticos sin arraigo en sus bases y mucho menos en la ciudadanía.

El Consejo Nacional Ciudadano de la Consulta Nacional Ciudadana

Después de 4 meses de trabajo de preparación, el 30 de julio de 2013, Alianza Cívica, convocó a 36 personas ampliamente reconocidas por sus saberes y experiencias en cuestiones energéticas, fiscales y de participación ciudadana, así como a representantes de organizaciones campesinas, sindicales, urbano populares, ambientales, y otras, preocupadas por el rumbo del país, para conformar de manera autónoma el Consejo Nacional Ciudadano de la Consulta Nacional Ciudadana, con la tareas de:

1. Acompañar el proceso organizativo de la Consulta.
2. Elaborar las preguntas que se presentarían a consulta a toda la ciudadanía en relación a la reformas energética y fiscal, en las jornadas que se llevarían a cabo los días 25 de agosto en 10 estados de la república y en el Distrito Federal y el 1º de septiembre en los otros 21 estados.
3. Acordar y vigilar el cumplimiento de las reglas de la organización de la Consulta.
4. Recibir, investigar y resolver eventuales quejas.
5. Emitir las resoluciones necesarias para garantizar la objetividad, certeza y transparencia de la consulta.

³ Este artículo está elaborado a partir de la participación del autor en todo el proceso y vicisitudes de la Consulta, y recoge de manera sintética la información entregada por el Consejo Nacional Ciudadano de la Consulta Nacional Ciudadana Sobre Reformas Energética y Fiscal a la Junta Directiva de la Cámara de Diputados y a las direcciones de todos los partidos políticos el pasado 25 de septiembre de 2013. La versión extensa de la información se encuentra en www.alianzacivica.org.mx/consulta/ 4. Lao Tse. Tao Te Ching. Versión de Stephen Mitchell. Alianza Editorial. España.2007. p. 133



Tareas de la sociedad civil

6. Dar a conocer oportunamente a la opinión pública, al Poder Legislativo y a los partidos políticos, el resultado del ejercicio ciudadano.

gasolina y diesel; así como, en otras plantas industriales para los fertilizantes que usamos? (Sí) (No) (No sé)

El objetivo de la Consulta Nacional Ciudadana

El objetivo principal de la Consulta Nacional Ciudadana fue conocer con certeza el punto de vista y la voz de la ciudadanía en relación a las reformas energética y fiscal que se van a discutir en el poder legislativo y darlos a conocer a la opinión pública. Las preguntas elaboradas por el Consejo Nacional Ciudadano, a las que se podía responder con tres opciones: sí, no, y no sé, fueron las siguientes:

7. ¿Estás de acuerdo en que se cobre IVA en alimentos y medicinas? (Sí) (No) (No sé)
8. ¿Estás de acuerdo en que se eliminen tratamientos especiales y privilegios en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los que se benefician algunas empresas y personas? (sí) (No) (No sé)
9. ¿Estás de acuerdo en que aquellos que más ingresos obtienen paguen mayor porcentaje de impuestos como lo establece la Constitución? (Sí) (No) (No sé)
10. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para permitir inversión privada en explotación y transformación de petróleo y gas en México? (Sí) (No) (No sé)
11. ¿Estás de acuerdo en que sólo Pemex invierta en México para construir refinerías, producir

12. ¿Estás de acuerdo en que los beneficios de la Industria Petrolera, cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo, se utilicen exclusivamente en inversión pública, como: construcción de hospitales, escuelas, ferrocarriles, investigación científica y desarrollo rural? (Sí) (No) (No sé)

El Consejo Nacional Ciudadano decidió, que para dar plena certeza, credibilidad y confianza a la Consulta Nacional Ciudadana, podrían participar todas las personas mayores de 18 años con su credencial de elector/a, cuyo número sería anotado en las listas de las mesas receptoras. Igualmente para dar mayor seguridad se decidió entintar el dedo pulgar derecho de las y los participantes en la consulta.

Actividades preparatorias

Para llegar a una consulta informada se organizaron 6 foros regionales en Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Villahermosa, Tabasco; Ciudad de México; Toluca, Estado de México; y Coatzacoalcos, Veracruz. También circularon diversos documentos y materiales informativos y analíticos sobre las implicaciones, ventajas y desventajas de las diversas propuestas a través de Internet. Hubo algunos promocionales de la Consulta Nacional Ciudadana en radio, pero en general, contó con escasa difusión pública en medios electrónicos de comunicación por la carestía de los mismos.



Tareas de la sociedad civil

Alianza Cívica convocó y coordinó a integrantes de organizaciones civiles y sociales de todo el país para instalar mesas receptoras en lugares públicos de amplia afluencia: mercados, estaciones de transporte público, parques, iglesias, plazas, centros deportivos, entre otros. Se instalaron 7518 mesas receptoras en todos los estados del país y en el Distrito Federal, en las que emitieron su opinión 724,426 personas, en 1271 municipios de las entidades federativas y 16 delegaciones del Distrito Federal. El promedio nacional de participación por mesa fue de 97 personas.

Se anularon los resultados de 75 mesas receptoras por inconsistencias serias en su registro: 30 en Michoacán, 26 en el D.F., 12 en Guerrero, 3 en Tlaxcala, 2 en Puebla y 2 en Veracruz.

La Consulta Nacional Ciudadana fue un ejercicio democrático apartidista en el que participaron más de 20,000 personas en la organización logística, que se sumaron a los 724 mil mexicanos y mexicanas que expresaron su opinión en las urnas, como ciudadanía activa y participante en la definición de las grandes decisiones de la agenda pública nacional.

Principales resultados

- El 92.76% de participantes expresaron su desacuerdo en que se aplique el IVA en alimentos y medicinas.
- El 77.56% manifestó estar de acuerdo en que se eliminen tratamientos especiales y privilegios en el pago de Impuesto Sobre la Renta de los que se benefician algunas empresas y personas.
- El 87.61 % de la ciudadanía expresó estar de acuerdo en que, como lo establece la Constitución Mexicana, quienes tienen más ingresos paguen mayor porcentaje de impuestos.
- El 83.52% de las y los mexicanos expresaron su desacuerdo con que se modifique la Constitución para permitir inversión privada en la explotación y transformación de petróleo y gas en México.
- El 85.46% de participantes en la consulta expresaron su acuerdo en que sea sólo Pemex quien invierta en México para construir refinерías, producir gasolina y diesel; así como, en otras plantas industriales para los fertilizantes que usamos.
- El 91.61% de las y los participantes expresaron su acuerdo en que los beneficios de la Industria Petrolera, cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo, se utilicen exclusivamente en inversión pública, como: construcción de hospitales, escuelas, ferrocarriles, investigación científica y desarrollo rural.

Como puede verse, en la Consulta Nacional Ciudadana la ciudadanía señala un rumbo claro para las reformas energética y fiscal, ciertamente contrario al sentido de la intensa publicidad con la que, durante más de un mes, el gobierno bombardeó, literalmente, a toda hora y en toda televisión pública y privada la opinión pública. También en la televisión privada se difundieron en horarios estelares guiones especialmente preparados para apoyar la propuesta energética del ejecutivo federal, entretejidos con la trama de varias telenovelas.



Tareas de la sociedad civil

El Consejo Nacional Ciudadano entregó formalmente los resultados de la Consulta Nacional Ciudadana a la Junta Directiva de la Cámara de Diputados y a todos los Partidos Políticos el pasado miércoles 25 de septiembre de 2013.

Otras voces en la Reforma Energética y Fiscal

Apenas unos días después de la realización de la Consulta, el 19 de septiembre de 2013 se hizo pública una proclama firmada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador, Fray Raúl Vera López, O.P., Pablo González Casanova, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez Gándara y Mario Saucedo Pérez, llamando a toda la ciudadanía para defender nuestro petróleo.

Por la importancia social y política de este texto en estos momentos y por la suma de fuerzas que representan y que habían caminado separadas, presento a ustedes el texto completo de este llamamiento:

Ante la grave emergencia del país y la amenaza de continuar la entrega de nuestros recursos, territorios y riquezas con la reforma energética que promueve el gobierno, los suscritos llamamos a todas las mexicanas y mexicanos, sin distinción de creencias, ideologías o posiciones políticas y sociales, a unirnos para evitar el despojo de la nación y de nuestro pueblo que promueven el gobierno y las corporaciones petroleras transnacionales.

A partir del respeto a nuestras diferencias llamamos a organizar la resistencia civil y pacífica, reconociendo

la autonomía e independencia de las organizaciones y de los individuos, en torno a los siguientes ejes:

1. Oponerse abiertamente a las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución de la república que propone el gobierno y defender nuestra soberanía, así como los recursos energéticos que son propiedad de la nación tras incontables luchas históricas, y base de nuestro desarrollo integral y sustentable.
2. Oponerse a la iniciativa de reforma hacendaria, que distribuye la carga fiscal de una manera particularmente inequitativa y recesiva, profundizando la crisis al afectar a las pequeñas y medianas empresas, a las clases medias, y sobre todo a los trabajadores y a los más pobres de México.
3. Rechazar la campaña mediática de linchamiento contra las justas luchas de los maestros ante una reforma que los priva de sus derechos laborales y que no es educativa.
4. Denunciar la creciente violencia, represión y violación a los Derechos Humanos civiles y sociales que sufren los movimientos sociales, los pueblos y las comunidades, sus víctimas, dirigentes y defensores.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas y culturales, a los movimientos, pueblos y comunidades indígenas y no indígenas, a los ciudadanos y ciudadanas a participar activa y pacíficamente, sin caer en provocaciones, desde todas las trincheras a las que cada quien tenga acceso, en las luchas por alcanzar estos objetivos de soberanía, libertad y justicia. ¡Viva México!



Tareas de la sociedad civil

Al andar se hace camino...

Como puede verse, la voluntad ciudadana es muy clara frente a los intereses transnacionales y de las grandes empresas. Hay una gran claridad en cuanto a la relación entre el petróleo y la soberanía nacional, entre la propiedad del petróleo y las refinerías y una estrategia económica y política que parta y ponga en el centro los intereses de toda la población, el bienestar colectivo, la generación de empleos dignamente remunerados, pues es el pivote de un nuevo modelo de industrialización y modernización de las cadenas y plantas productivas. Obviamente esta propuesta incluye un profundo saneamiento de la corrupción del sindicato, pero también está decididamente en contra de que la renta petrolera sea entregada a y apropiada por particulares nacionales o extranjeros, bajo cualquier tipo de argucias jurídicas.

Los caminos para la defensa del petróleo están abiertos, la lucha tomará diversos caminos, en los que todas y todos los ciudadanos estamos invitados a caminar...

De la confrontación al diálogo: la necesidad de cambios cultural

SYLVIA AGUILERA GARCÍA
CENTRO DE COLABORACIÓN CÍVICA, A.C.
WWW.COLABORACIONCIVICA.ORG

*Una gran nación es como una gran persona:
Cuando comete un error, se da cuenta.*

Habiéndose dado cuenta, lo admite.

Habiéndolo admitido, lo corrige.

*Considera a quienes señalan sus faltas
como sus más valiosos maestros.*

Piensa en su enemigo

como en la sombra que él mismo proyecta .⁴

Lao Tse

En el marco de las movilizaciones que en los últimos meses ha llevado a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, Juan Carlos Romero, en el blog de Letras Libres⁵, escribió sobre la forma cómo dichas manifestaciones han develado, principalmente a través de las redes sociales, expresiones de repudio llenas de racismo, clasismo y odio hacia este movimiento. Siendo sumamente interesante la recopilación de varios ejemplos, de cómo las personas se están refiriendo a los maestros, lo que más me llamó la atención es que, Romero no hace una defensa de los motivos o las formas que el magisterio está llevando a cabo, lo que pone claramente sobre la mesa es cómo se desvela una cultura de la intolerancia y el odio en nuestro país en declaraciones de 140 caracteres.

Este tipo de reacciones podemos encontrarlas casi en cualquier otro conflicto social. Se utilizan adjetivos para caracterizar a los actores en el conflicto, se polarizan y simplifican las posturas, casi de forma natural se define a buenos y malos, y se desata la creatividad para proponer cualquier cantidad de soluciones posibles al conflicto, por desgracia, casi todas ligadas a la utilización de la violencia.

⁵ <http://www.letraslibres.com/blogs/otra-vez/la-colera-de-los-imbeciles>



Tareas de la sociedad civil

Lo que está claro, porque los hechos históricos, tanto en nuestro país como en otras latitudes, han demostrado que, el cierre del espacio político para la resolución y transformación de los conflictos sociales y la primacía de la violencia para responder a los mismos, podría funcionar en un primer momento, sobre todo para contener ciertas expresiones sociales. Sin embargo en el inmediato plazo y a la larga, suelen ser procesos mucho más costosos, en términos del rompimiento del tejido social y de la capacidad de gobernabilidad. No obstante, las respuestas violentas o radicales de los diversos actores en los conflictos sigue siendo la regla.

Cambiar esa cultura política de cómo enfrentar la resolución de los conflictos no es una situación menor, requiere de un proceso donde los actores puedan desarrollar distintas capacidades para la negociación y el diálogo, entendido como “el proceso en el que las personas se reúnen para construir confianza y entendimiento mutuo más allá de las diferencias y para generar resultados positivos a través de la conversación”⁶. En ese sentido, los procesos de diálogo social se vuelven trascendentales en países como el nuestro, donde la violencia está presente en todos los ámbitos de la sociedad, y donde si no se hace un cambio pronto impactará de forma irreversible a las nuevas generaciones.

La falta de espacios de diálogo confiables y legítimos en nuestro país muestra, no sólo la vulnerabilidad de la incipiente democracia que se ha construido en México, sino también de los principios que en un primer momento la sustentaron: elecciones libres y secretas y fortalecimiento de las instituciones y

las leyes (necesidad de reformas estructurales), elementos ampliamente utilizados en naciones en post conflicto, y ampliamente demostrado que son necesarios pero insuficientes.

Las nuevas tendencias de construcción de la democracia nos demuestran que las democracias deben fortalecerse, no sólo en sus mecanismos de representación directa, sino también en la capacidad del Estado para desarrollar procesos amplios de diálogo donde se tomen en cuenta las preocupaciones, necesidades y propuestas de diversos actores. Esto hace total sentido en el caso mexicano, donde sus instituciones y las representaciones formales que de sus mecanismos emanan están en una fuerte crisis de legitimidad. Ni siquiera contar con uno de los sistemas electorales más grandes y caros del mundo ha ayudado a legitimar a los actores políticos en las decisiones trascendentales del país. Las prácticas políticas en nuestro país siguen estando muy cargadas de cooptación, clientelismo y autoritarismo, lo cual es fácil de observar a simple vista en casi cualquier interrelación entre sociedad y gobierno o tomadores de decisiones.

En ese sentido, uno de los cambios más importante que falta consolidar en el proceso de democratización en México es el cambio de cultura política, y los procesos de diálogo y deliberación social son una oportunidad para abonar en dicho cambio. En ese sentido es importante recuperar la reflexión de Hal Saunders sobre debate y diálogo: “el debate presupone una sola respuesta correcta, e insiste en forzarla y defenderla, mientras que el diálogo supone la posibilidad de una respuesta mejor que

⁶ http://www.oas.org/es/sap/dsdme/pubs/DIAL_%20DEMO_s.pdf p. 9



Tareas de la sociedad civil

cualquiera de los puntos originales. El debate limita las perspectivas y cierra las mentes; el diálogo puede construir nuevas relaciones⁷ y nuevas formas de relacionarnos, añadiría. Para esto podría tomarse en cuenta lo siguiente:

1. Es necesario que los actores sociales y políticos cuenten con herramientas y capacidades de diálogo y negociación. Esto puede parecer banal, pero si no se ponen en entredicho las actuales prácticas de transacción en vez de negociación, se seguirán repitiendo las mismas formas que ahora tienen en crisis a la sociedad mexicana.
2. Es necesario que dentro de estas capacidades se dé especial énfasis en analizar los conflictos de forma integral y compleja, donde se pueda llegar a conocer a fondo los intereses y perspectivas sobre una situación y así poder generar espacios de acuerdo, donde se tomen en cuenta las diferencias.
3. Es de suma importancia que los actores sociales desarrollen estrategias para el diálogo y construyan coaliciones que las fortalezcan. En este sentido, el rol de las organizaciones de sociedad civil y de la academia es clave para fortalecer a actores sociales que han estado en situaciones de marginación o no cuentan con recursos suficientes para fortalecer su estrategia. Estos procesos deben asegurar la inclusión de las diferentes perspectivas sobre el problema a tratar, a través de la inclusión de todos los actores relevantes.
4. Tomar en cuenta la importancia que tiene la presión social para que este tipo de procesos se lleven a cabo. Si la sociedad se manifiesta a favor de procesos no violentos y constructivos de resolución de conflictos, cualquier alternativa violenta, de cualquiera de las partes, se deslegitima y pierde parte de su poder. La comunidad se vuelve, desde esta lógica, en uno de los principales garantes del desarrollo de estos procesos y de su éxito. De ahí la importancia de propuestas como la generación de espacios de “tercer lado” donde la sociedad en su conjunto, dependiendo del nivel de conflicto, se vuelve co-participe y co-responsable del proceso y las soluciones, lo que fortalece las relaciones comunitarias y el tejido social. Otro rol importante que lleva a cabo el tercer lado⁸ es el de ser el garante de que este tipo de diálogos no reproduzcan relaciones de inequidad o exclusión que perpetúan relaciones perversas de poder.
5. Para generar actitudes de resolución positiva de los conflictos, los medios de comunicación juegan un papel preponderante, ya que tienen la posibilidad de presentar la complejidad de los conflictos y de pronunciarse por opciones constructivas que tomen en cuenta la diversidad de enfoques. De ahí la importancia de generar espacios de entendimiento de los temas y de evitar a toda costa la apología de la violencia y la descalificación y adjetivación de los actores.
6. Lo anterior debe darse en un contexto donde los actores directos en el conflicto deben construir y

⁷ Ibid. p. 21

⁸ <http://www.thirdside.org/thirdside.cfm?Language=Spanish>



Tareas de la sociedad civil

mantener espacios legítimos y confiables para sus contrapartes, que sean respetuosos del estado de derecho y que den certeza a través de procesos claros de transparencia y rendición de cuentas.

Los cambios culturales no son fáciles, pueden pasar varias generaciones antes de ser palpables. Sin embargo, México está en el momento preciso, por lo crítico de la situación, de apostar a nuevas formas de hacer política, de abordar lo público, dejando de lado la confrontación y todas las formas de violencia. Esta es nuestra oportunidad.

Sociedad civil: Agenda pendiente para ejercer su derecho de participación

MIGUEL DE LA VEGA

ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES, A. C.

MIGUEL@ALTERNATIVASYCAPACIDADES.ORG

@MIG_DELAVEGA

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han buscado de manera histórica ejercer su derecho a participar en las decisiones que atañen a la vida pública del país. Movidas por misiones y causas, han diversificado su actuar desde sus inicios, a través de esquemas de atención a población vulnerable, hasta buscar solucionar las causas de problemas sociales por medio de procesos de incidencia en política pública como medios de participación ciudadana y también, en ocasiones, como contrapeso de los poderes gubernamentales.

Este proceso, que ha involucrado a diversas generaciones de OSC, ha ido posicionando en la agenda política, no solo temas de relevancia social,

sino también la propia idea de la participación de la sociedad civil organizada en el diseño y toma de decisiones públicas. Las organizaciones han incidido en la promulgación de leyes, el diseño de programas gubernamentales e introducido la necesidad de nuevas prácticas en la acción gubernamental tales como la transparencia y la rendición de cuentas.

Para poder transitar a esquemas de inclusión se demanda de funcionarios y legisladores sensibilidad y apertura para poder integrar demandas de diversos grupos ciudadanos por medio de la creación de espacios de participación en el entendido de su rol como garantes de dicho derecho. Cuando esto no ocurre responsabilizamos al gobierno ya que la cerrazón muchas veces corresponde a una falta de visión acerca de la necesidad, para favorecer una democracia participativa, de contar con prácticas extendidas de participación ciudadana para conveniencia del estado en todos sus niveles. Lo anterior es tan solo una parte de la agenda pendiente de parte de los gobiernos.

Sin embargo las propias organizaciones en pocas ocasiones nos detenemos a pensar que la responsabilidad en la inclusión de la sociedad civil en espacios y procesos de incidencia no es asunto exclusivo de funcionarios y legisladores. Es responsabilidad de la propia sociedad civil entender no solo cuales son los ciclos de la política pública así como las instancias a las cuales deben interpelar de forma que, literalmente, puedan ejecutar procesos de incidencia en los tiempos y formas más afectivos. La agenda pendiente de la sociedad civil pasa por entender y desarrollar aquellas capacidades que deben considerarse como medios y procesos necesarios para ejercer un proceso de influencia efectivo.



Tareas de la sociedad civil

La falta de capacidades para la incidencia ocasiona que en aquellas ocasiones cuando se logra contar con espacios propicios muchas OSC desconocen cómo aprovecharlos, no cuentan con los elementos y la experiencia para realizar una interlocución efectiva y con propuestas viables, no cuentan o no son capaces de obtener recursos para sostener estos procesos a lo largo del tiempo o bien no gozan de autonomía suficiente para hacerlo. Simplemente no saben cómo procurar la apertura de espacios y utilizar estrategias diversas para tal efecto.

Esto también ocasiona ausencia de diálogo o bien diálogos ríspidos, lejanos, entre dos sectores, el gubernamental y el social, que pareciera hablaran lenguas distintas, con procesos y formas de articulación ajenas, y totalmente en desproporción de fuerzas, recursos, poder y capacidad de influencia. El resultado es que en numerosas ocasiones las OSC son excluidas o bien usadas como ejemplo de una participación ciudadana “simbólica” a través de foros, eventos gubernamentales o diálogos prefabricados por algunos actores gubernamentales.

Por otro lado la falta de herramientas, y espacios, conduce a que algunas OSC entiendan la incidencia solo como acciones confrontativas, poco efectivas y en ocasiones contraproducentes para sus fines. Cerrando aún más las posibilidades de diálogo constructivo y generando una opinión pública adversa. No descalificamos las acciones de manifestación pública, solo pretendemos compartir que existen una diversidad de elementos y alternativas al alcance de los propios actores sociales.

La reflexión entonces, pretende abordar aquellos retos que las OSC debemos enfrentar hacia el interior de nuestras propias organizaciones para construir capacidades y poder ejercer así una incidencia efectiva para contribuir, en paralelo, a transformar la visión del gobierno, extender la apertura de espacios de comunicación y contribuir al enriquecimiento a las políticas públicas, en aras de brindar respuesta a las necesidades sociales.

Los siguientes son algunos de los aspectos que hemos identificado como agenda pendiente de la sociedad civil:

Herramientas metodológicas para la incidencia: Es conveniente que las organizaciones consideren en primer lugar qué es y cuál es el ciclo de la política pública. “Recordemos que la política pública es un conjunto de acciones: normas, recursos materiales y financieros. Las políticas públicas además contienen objetivos amplios que deben cumplirse gradualmente. Para tener claridad sobre la forma en que pueden incidir es necesario que conozcan cómo se construyen [...]. El modelo que les presentamos aquí distingue tres etapas [...]: la formulación, la implementación y la evaluación”⁹. Es preciso entonces que la OSC identifique el momento en el cual insertar su proceso de incidencia.

Adicionalmente deberá tener claridad acerca de cuál es la instancia más adecuada de interlocución y por último qué estrategia o grupo de estrategias puede utilizar. Alternativas y Capacidades presenta un abanico de opciones para la incidencia entre las que se encuentran:¹⁰

⁹ Manual de incidencia en políticas públicas. Tapia Álvarez. Mónica, Et al. Alternativas y Capacidades, A. C. 2010, p 51.

¹⁰ Ibidem. p 80.



Tareas de la sociedad civil

- Investigar y recomendar.
- Acciones de cabildeo no lucrativo con fines sociales.
- Elaboración de materiales y capacitación (a ciudadanos o bien a funcionarios).
- Construcción de alianzas y coaliciones.
- Simbolización de las causas y adhesiones ciudadanas.
- Comunicar para visibilizar y posicionar temas en la agenda pública.
- Procurar apoyo y movilización ciudadana.
- Acciones de contraloría y monitoreo a la acción gubernamental.
- Campañas de presión a la inclusión o toma de decisiones.
- Procesos de responsabilización inclusive con acciones de denuncia.
- Diversificación de fuentes de apoyo.
- Habilidades de expresión y comunicación.
- Transparencia y rendición de cuentas.

Autonomía y actuar ético: Para ejercer acciones de interlocución e influencia se requiere también contar con independencia de financiamiento, de toma de decisiones y pensamiento. Si una OSC depende exclusivamente de financiamiento público; si su situación financiera es sumamente frágil; o bien, si no cuenta con buenas prácticas y es en sí misma sujeta a escrutinio público por acciones cuestionables, no podrá incidir con autonomía suficiente. Tendrá que verse obligada a ajustar su discurso al posicionamiento de terceros sin la validez suficiente para ser tomado como un interlocutor.

Capacidad de formulación de propuestas: Aún cuando la OSC comprenda los efectos y las causas de determinados problemas públicos no necesariamente contará con la capacidad técnica para poder formular mejoras a un programa o legislación. Precizará entonces de los servicios de consultores externos, alianzas o de la contratación de personal especializado para formular propuestas que no solo respondan a los intereses y voces de aquellos afectados sino que además, cuenten con los elementos técnicos suficientes de la materia en cuestión.

Diversidad de recursos: Un paradigma común es considerar que los recursos financieros o materiales son lo único o lo más relevante en este tipo de procesos. En realidad los recursos requeridos también son diversos, hay que tomar en cuenta que la OSC podrá influir de forma más efectiva si cuenta con:

Sostenibilidad: Para obtener resultados los procesos de incidencia muchas veces toman un tiempo prolongado. Para poder sostener su esfuerzo en el tiempo las organizaciones deben considerar que cuentan con recursos financieros y materiales suficientes, sin embargo la obtención de recursos es el resultado del desarrollo de las capacidades comunitarias (en el caso de colectivos) o bien de las institucionales (en el caso de organizaciones formalmente constituidas). Entre algunas capacidades relevantes se encuentran:



BRÚJULA CIUDADANA

Tareas de la sociedad civil

- **Capital social:** Como el universo de relaciones que puede atraer otro tipo de recursos, abrir espacios de interlocución o proveer de habilidades y apoyos diversos.
- **Articulación:** Construcción de alianzas y redes.
- **Capacidad comunicativa:** De sus procesos y causas pero también como capacidad de escucha para integrar demandas ciudadanas, comunitarias e inclusive académicas o de otros sectores.
- **Técnica:** En cuanto a desarrollar experiencia metodológica para implementar estrategias de incidencia como las mencionadas.
- **Evaluación:** Para poder generar aprendizajes y poder conocer cuáles estrategias resultan efectivas para la transformación social.

Uno de los objetivos de la sociedad civil es que la propia incidencia sea efectiva en solventar las causas de un problema y que dicho esfuerzo sea: sustentable, autónomo y participativo, generado a través de alianzas, diverso, incluyente, técnicamente

viable y construido en las formas y tiempos más adecuados a los ciclos de la política pública.

Finalmente conviene señalar que en procesos donde se pretende construir mejores condiciones para el sector social es necesario evitar sectorizar. Para esto es preciso dejar de lado nuestras causas particulares por un momento y enfocarnos en la causa común. La construcción de un marco de fomento a las OSC u otras causas colectivas solo podrán lograr avances si se buscan las coincidencias a través de acuerdos mínimos donde, como nos enseñó la Cumbre Ciudadana de 2012, se logren acuerdos con los “que es posible vivir”. Faltaría entonces, agregar como parte de la agenda, la necesidad de contar con habilidades de negociación, entendida esta como la capacidad de renunciar a determinados intereses individuales en aras de construir propuestas para todos.

La construcción de un marco favorable a la participación ciudadana y la sociedad civil organizada no se construirá solo. Precisa de acuerdos, de ceder, de escuchar, de incluir, de respetar y, por supuesto, de prepararnos para incidir. ➤

El contenido de la brújula ciudadana es de exclusiva responsabilidad de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.

CONTACTO: KARLA AMBROSIO TORRES.
ÁREA DE COMUNICACIÓN:
TELS. 5514 1072 / 5525 8232 / 5525 8276
karla.ambrosio@iniciativaciudadana.org.mx



INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO, asociación civil mexicana, surge en el contexto de las elecciones del 2006 que evidenciaron un ambiente de polarización política, desigualdades económicas y sociales y disparidades regionales a lo largo del país. Dicho ambiente creó un claro distanciamiento entre la sociedad y el sector político, al igual que al interior de la sociedad misma, rompiendo los incipientes espacios de diálogo que intentaban construirse a partir de la alternancia política del 2000. En este contexto se hizo evidente la necesidad de abrir y promover espacios plurales de diálogo y construcción de acuerdos desde la sociedad civil, de tal manera que la agenda de políticas públicas del país avanzara y no se rompiera el ya de por sí frágil tejido social nacional.

Desde entonces se ha buscado generar las condiciones para hacer posible la promoción de una cultura del diálogo que identifique las coincidencias en beneficio del interés público. Iniciativa Ciudadana se creó con la vocación de generar y convocar a aliados entre los diversos sectores nacionales e internacionales, para sumarse a los esfuerzos de diálogo y crear una agenda pública nacional con una visión ciudadana.

Brújula Ciudadana es un instrumento de comunicación ciudadano que contribuye al análisis y reflexión sobre la agenda nacional en México. Su objetivo es contribuir a la generación de opinión pública sobre una agenda común en temas prioritarios en el ámbito político, económico y social a través de información de calidad y la reflexión plural para la toma de decisiones, llegando mensualmente a más de 4,000 lectores.